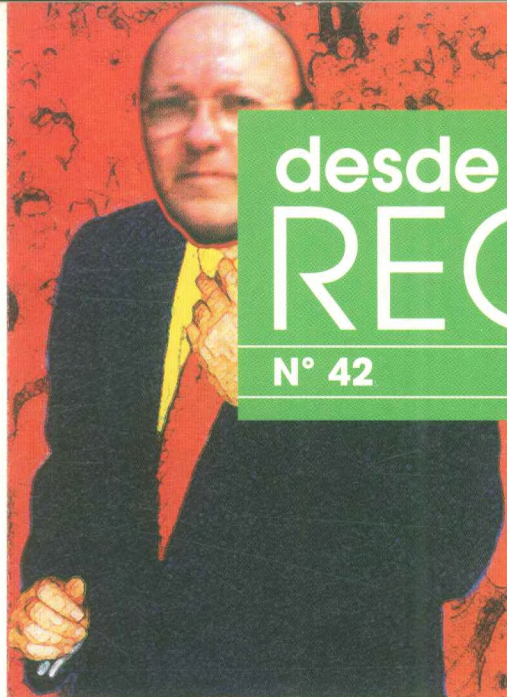
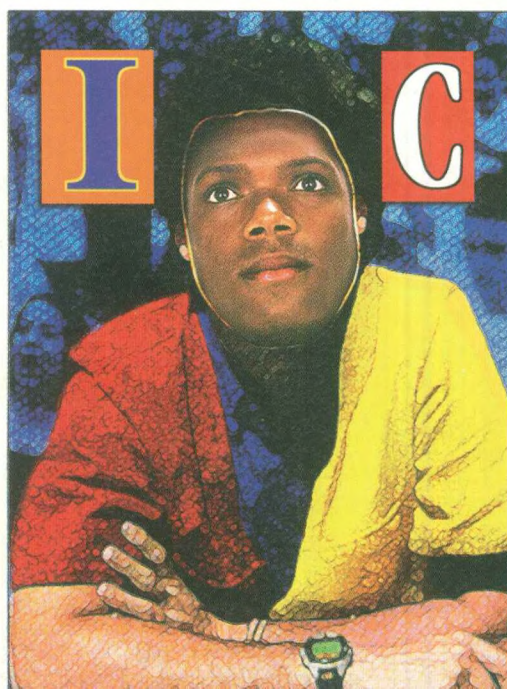
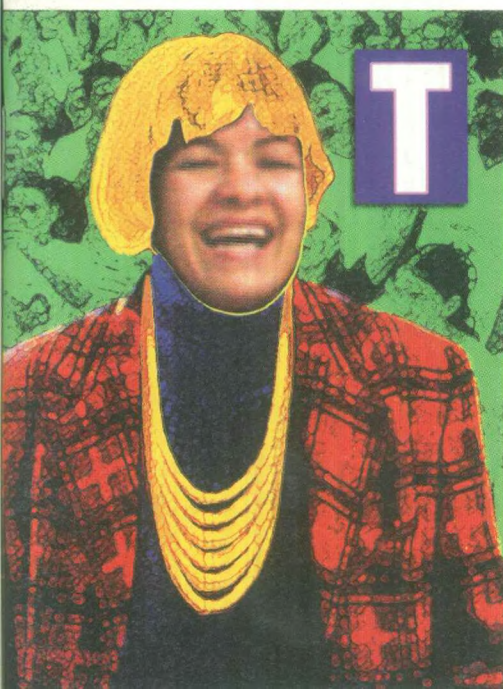
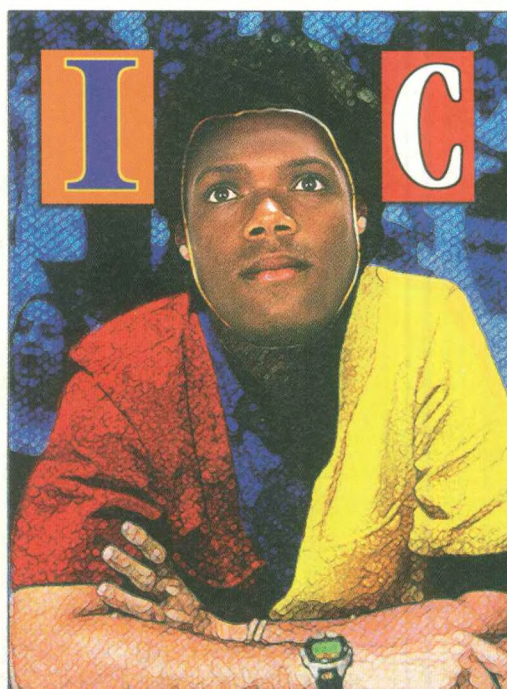
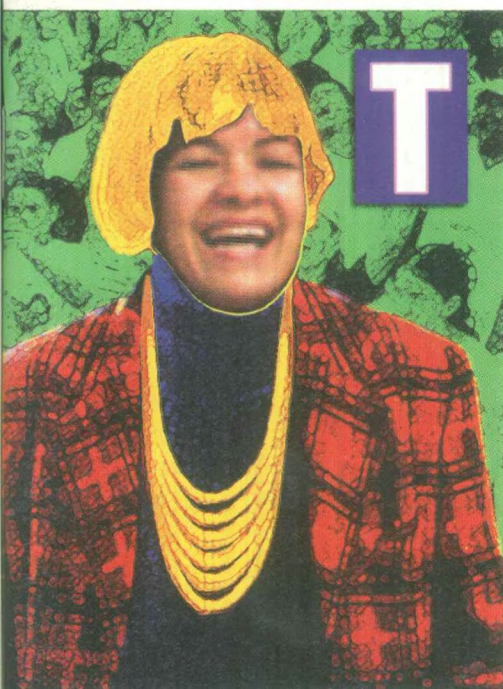
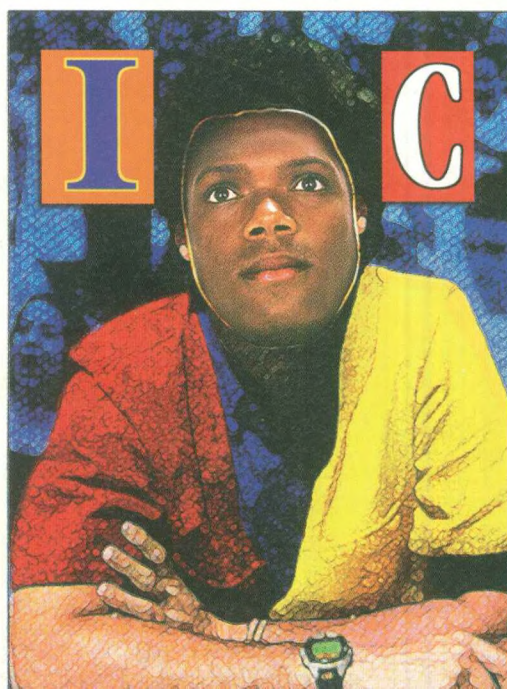
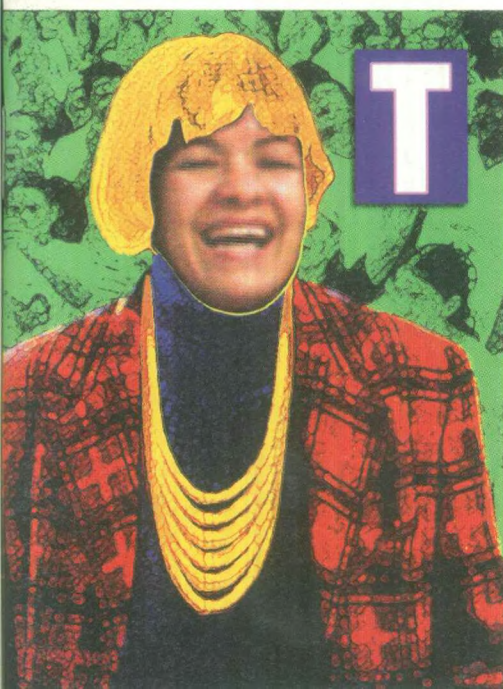
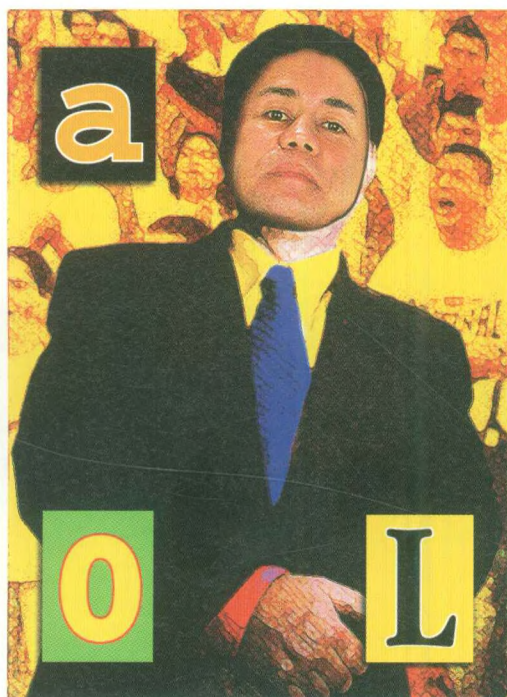




desde la REGION

N° 42

JUNIO - 2004



DIRECTOR
Jorge Bernal

JUNTA DIRECTIVA:
Rubén Fernández A. -Presidente
Jorge Bernal
Gloria Naranjo G. -Vicepresidente
Ana María Jaramillo A. -Secretaría
Juan F. Sierra V.

COMITÉ EDITORIAL
Rubén H. Fernández A.
Jorge Bernal
Sergio Valencia R.
Luz Elly Carvajal G.
Javier Iván Toro V.
Juan José Cañas R.
Sol Astrid Giraldo C.
Luz Amparo Sánchez M.

Coordinación Editorial
Luz Elly Carvajal G.

Calle 55 N° 41-10
Tel: (57-4) 216 68 22
Fax: (57-4) 239 55 44
A.A. 67146 Medellín - Colombia
C.E: coregion@region.org.co
www.region.org.co

La política es la lucha por el centro

Norbert Lechner

Después del saqueo
El capitalismo latinoamericano a
comienzos del nuevo siglo

Atilio A. Borón

La política y sus crisis. Nuevos:
escenarios, actores, roles y formas
orgánicas

Pablo Emilio Angarita C.

Nuevas fuerzas políticas en el
escenario territorial: El reto de
innovar

Fabio Enrique Velásquez C.

Ruta Pacífica de las Mujeres
Colombianas

Max Yuri Gil Ramírez

Ilustradores

Fernando Muñoz: Págs. 4, 7.

Mónica Betancourt: Págs. 10, 14, 16.

Natalia Fernández: Págs. 13, 34, 37,
38.

Alexánder Bermúdez: Págs. 18, 21,
22, 25.

Elkin Úsuga: Págs. 26, 29, 30, 33.

Diseño e impresión: Pregón Ltda.

Para esta publicación la Corporación
Región recibe el apoyo de Agro Acción
Alemana; Novib, Holanda; Terre des
Hommes, Basilea; Diakonia, Suecia.

Editorial

CIUDADANÍA RESPONSABLE

PARA ABORDAR LAS TAREAS DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD

Uno de los pilares de la gestión del Plan de Desarrollo de Medellín recién aprobado por el Concejo de la ciudad será el de la «corresponsabilidad». Parte de la premisa acertada de que «la construcción de la ciudad debe ser un compromiso de todos sus habitantes» y, según el texto aprobado, esa corresponsabilidad podrá concretarse en los ámbitos territorial, político, programático y organizacional e institucional.

Esta idea está soportada en un reconocimiento implícito importante: frente a la magnitud y la complejidad de los problemas que tiene la ciudad, ningún sector de forma aislada podrá resolverlos si no cuenta con el concurso de los demás. En este sentido, es cierto que no hay nadie exento de responsabilidades frente a los retos del presente y del futuro de la ciudad.

Pero, si bien es cierto que todos tenemos responsabilidades, también es verdad que no todos tenemos las mismas. Existe un riesgo enorme de confundir el que *“todos tenemos algo que poner”* con el que *“todos tenemos que poner lo mismo”*. ¡Y no es así! El Estado y los gobiernos tienen unas responsabilidades, los agentes del mercado tienen otras y las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía tenemos también las nuestras.

En nuestra opinión la función central del Estado sigue siendo “... garantizar

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2, CPN). Está diseñado centralmente para garantizar los derechos fundamentales y proteger las libertades de la población. Garantizar derechos como la educación, la salud, la alimentación adecuada, especialmente para la población infantil y juvenil y para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, deberá ser afán cotidiano e indelegable del gobierno local.

Por su parte el sector empresarial tiene fuertes responsabilidades sociales con la ciudad. La creación de empleo y la generación de riqueza es lo primero que salta a la vista, pero existe un punto crítico referido a la necesidad de disminuir las enormes desigualdades económicas y sociales que se han incubado en la región. No basta pues, crear empleo, debe hacerse un esfuerzo para que ese empleo sea de calidad y tenga la posibilidad de mejorar la calidad de vida a su alrededor, y esto sólo se logra articulándolo a las dinámicas formales de la economía y al sistema público de protección social. La vía de hacerse competitivo rebajando los costos laborales ha demostrado, en primer lugar, no ser sostenible—más aún en un contexto de apertura económica— y, en segundo lugar, muy costosa socialmente.

Pero ahora queremos detenernos en la sociedad civil y sus organizaciones. Hay

varios deberes que deberíamos enfrentar con toda decisión. El primero de ellos es la cooperación con aquellas políticas y acciones gubernamentales con las que se concuerda en su orientación y alcances. Esta actitud cooperante incluye y se concreta en la participación en la vida comunitaria local en sus múltiples dimensiones, en los espacios de participación y deliberación abiertos para abordar cuestiones de interés general, en la confección, desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas y acciones en distintos niveles. Los espacios de participación no son exactamente una dádiva de los servidores públicos; son en realidad conquistas de movimientos ciudadanos y hacer uso adecuado de ellos es, no sólo honrar la memoria de quienes lucharon por conseguirlos, sino una manera cualificada de ejercer la ciudadanía.

Es de destacar una propuesta contenida en el Plan de Desarrollo aprobado, sobre la cual ciframos enormes expectativas y esperanzas. Nos referimos a los "Congresos Ciudadanos" que habrán de realizarse anualmente. Hemos dicho en el pasado que uno de los retrocesos más graves que tuvo la ciudad en los últimos años fue el cierre de los espacios de deliberación pública creados durante la década de los noventa. El espíritu de la mencionada propuesta es precisamente subsanar ese vacío. Lo novedoso sin embargo debiera ser que, además de crear los necesarios espacios para debatir los problemas de la ciudad, tal como se hizo por ejemplo en los Seminarios Alternativos de Futuro para Medellín, se avance en la concertación amplia de políticas y programas de alcance estratégico; el avance sería ya no sólo deliberar, sino construir acuerdos duraderos; una vez más, el concurso de la ciudadanía es central para el éxito de estos propósitos.

El otro deber es el del control ciudadano del poder público. En ejercicio de su autonomía, de su capacidad crítica y propositiva, cada ciudadano y ciudadana, y sobre todo las organizaciones sociales, han de tener en su agenda de trabajo permanente la evaluación de lo que se hace, de cómo se hace y vigilar para que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente. Hay una regla de juego clara y visible para todos: el Plan de Desarrollo. Las actuaciones de los representantes de la municipalidad habrán de ajustarse a él. Pero es mucho el terreno que hay que recorrer entre las formulaciones generales del plan y las ejecutorias reales; en este interregno es que cabe y se necesita mucha participación y mucho seguimiento de la ciudadanía.

Por fortuna, la ciudad cuenta con instrumentos sociales y organizativos creados para estos ejercicios de colaboración y fiscalización. Para la cooperación y la participación en políticas públicas están, además de los espacios creados por ley como las Juntas de Acción Comunal o la Junta Municipal de Educación, el Consejo Municipal de Política Social, la Mesa de Infancia, el grupo de impulso a la política Familia Siglo XXI, el Grupo de Impulso y seguimiento al proyecto Conoce Tu Ciudad, el Grupo de Balance de Políticas Públicas de Juventud y Paise Joven, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, más un largo etcétera. Para las labores de control ciudadano a la gestión pública, el instrumento más importante sin duda alguna es la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo. Todo este capital social, que es herencia del trabajo realizado en esta ciudad durante la década de los noventa, tiene ahora una nueva oportunidad para movilizarse con una administración local amigable y dis-

puesta a la concertación y al diálogo, como quedó demostrado en la amplia convocatoria a debatir el borrador de Plan de Desarrollo.

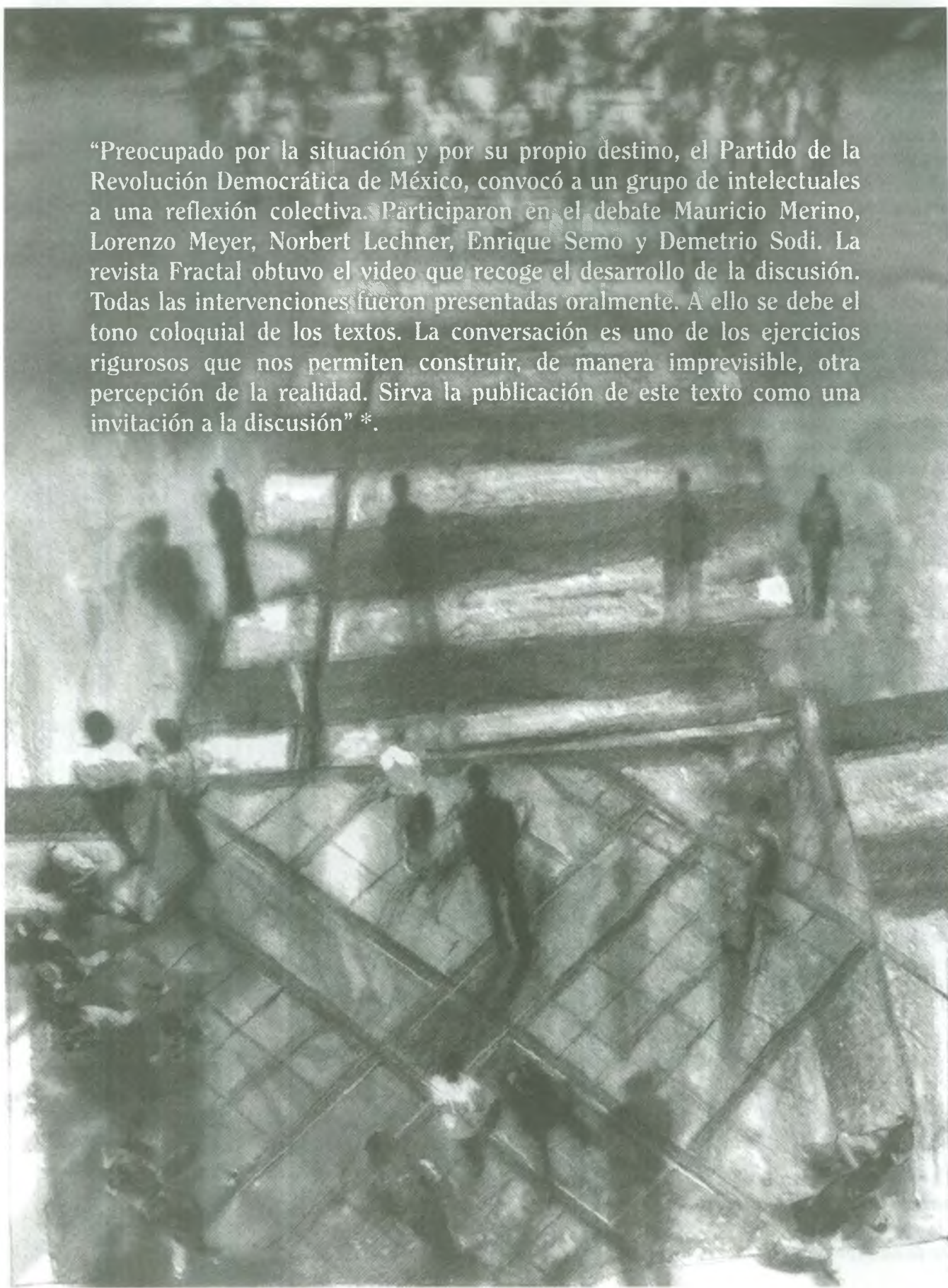
Una actitud política de permanente disposición a la colaboración crítica no es ninguna contradicción. Es justamente el ejercicio que requiere una ciudad como Medellín para enfrentar sus enormes retos. Ni siervos obsecuentes ni opositores a ultranza. Ciudadanos y ciudadanas responsables. Eso justamente es lo requerido. ◉

Desde la Región N° 42

Este número de nuestra revista institucional está dedicado a la reflexión sobre LA POLÍTICA Y LAS NUEVAS FORMAS DE HACER POLÍTICA que vienen emergiendo en el mundo contemporáneo. La importancia de esta reflexión se fundamenta en que, en este campo, vienen sucediéndose modificaciones notables también en Colombia y es necesaria una lectura permanente de ellas para saber si contribuyen o no a profundizar la democracia en nuestro país. Los triunfos electorales en octubre pasado de sectores independientes o de izquierda que hoy tienen en alcaldías y gobernaciones a personas provenientes de mundos muy distintos a los de la política tradicional ponen en la agenda de debates, nuevos temas y nuevos retos.

En esta perspectiva, hemos incluido en este número reflexiones sobre la política en general de N. Lechner y P. Angarita; un planteamiento sobre la democracia en el contexto mundial actual (A. Borón); una reflexión sobre los retos de los nuevos gobiernos territoriales en Colombia (F. Velásquez) y una entrevista con una de las protagonistas de la Ruta Pacífica de las Mujeres, experiencia que hace parte de las expresiones de acción social y política más renovadoras de los últimos años en Colombia (M. Gil).

“Preocupado por la situación y por su propio destino, el Partido de la Revolución Democrática de México, convocó a un grupo de intelectuales a una reflexión colectiva. Participaron en el debate Mauricio Merino, Lorenzo Meyer, Norbert Lechner, Enrique Semo y Demetrio Sodi. La revista Fractal obtuvo el video que recoge el desarrollo de la discusión. Todas las intervenciones fueron presentadas oralmente. A ello se debe el tono coloquial de los textos. La conversación es uno de los ejercicios rigurosos que nos permiten construir, de manera imprevisible, otra percepción de la realidad. Sirva la publicación de este texto como una invitación a la discusión” *.



LA POLÍTICA ES LA LUCHA POR EL CENTRO

Norbert Lechner

Investigador y académico del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales Clacso - Chile.

Antes que nada permítanme agradecer la invitación. Estoy convencido de lo fructífero que resulta el intercambio de opiniones entre el mundo académico y el mundo político. Cada uno respetando su autonomía y su lógica propia: los políticos tomando decisiones y los intelectuales planteando problemas. Como extranjero no me corresponde, obviamente, hablar sobre México; además no sería esa mi posible aportación. Quisiera tan sólo exponer algunas reflexiones a partir de un análisis político de orden teórico.

Comienzo por describir el nuevo contexto en que nos encontramos. En primer lugar, nos hallamos frente a un proceso de globalización que se distingue por la presencia de megatendencias que no sólo son económicas, sino también (y sobre todo) culturales, sociales y que amortiguan y relativizan las especificidades de cada país. En Latinoamérica estamos acostumbrados a creer que cada uno de nuestros países es único. México,

Chile, los otros países: siempre creemos que tienen algo *sui generis*. Sin embargo, la globalización actual relativiza las grandes particularidades nacionales.

Un segundo aspecto es el fin del sistema bipolar, el fin de la antinomia capitalismo-socialismo, de la antinomia militar y, por lo tanto, la emergencia de una nueva preeminencia de las relaciones económicas.

El tercer aspecto, estrechamente vinculado al anterior, es el avance de la sociedad de mercado y el redimensionamiento del Estado. No se trata simplemente del despliegue o no de la economía capitalista de mercado, sino del desarrollo de sociedades de mercado: sociedades definidas por actitudes, valores y conductas nuevas propias del mercado.

Ello ha provocado cambios profundos en la manera de pensar la política, en las formas de hacer política y, por supuesto, en el orden mismo

del Estado, como ya lo explicó Lorenzo Meyer; cambios que eliminan una serie de recursos políticos que antes se hallaban a disposición del Estado y que ahora simplemente ya no lo están.

Un cuarto elemento es la cultura posmoderna —una noción difícil y ambigua— que se despliega en dos ámbitos. Uno es la enorme aceleración del tiempo que cuestiona las dimensiones del pasado y del futuro, de manera que estamos viviendo más y más un solo presente, exento de nociones de futuro. El otro ámbito es la cultura de la imagen que se impone a la cultura de la palabra. Hay un cambio en la política que ya no obedece al discurso escrito, sino que se resuelve en imágenes fugaces, repetitivas y que imponen su ritmo a los acontecimientos políticos. La

* Este texto se publica con la autorización de: Fractal, revista Trimestral, N° 26. México: Mayo 12 del 2004. En: www.fractal.com.mx/F2varios.html - 101k - 10 Mayo 2004.

política transcurre con la rapidez de los noticiarios de CNN.

Un quinto rasgo que distingue al contexto en el que nos encontramos es, sin duda, la democracia como megatendencia (léase: el contagio democrático provocado por el contexto internacional) y que ha sido un elemento crucial en los procesos de democratización en América Latina. Lo paradójico es que mientras que la democracia ha adquirido un arraigo como nunca antes en América Latina, su sentido general está en duda. Cuando hicimos la transición en Chile teníamos la visión de que la democracia era un punto de llegada más o menos fijo. Llegamos y nos dimos cuenta que obviamente no era así. Debimos haberlo sabido antes, pero es diferente decirlo a vivirlo. El significado de la democracia se redefine en cada momento. Uno de los grandes problemas actuales es (no solamente en México y en América Latina) redefinir el sentido que tiene la democracia en este nuevo contexto.

No debe sorprendernos que junto a estos cambios se operen transformaciones en la política misma. Señalo tres de ellas que me parecen notorias. La primera es el *descentramiento de la política* (que significa algo más que la noción de “descentralización”). Un proceso de descentralización territorial, por ejemplo, puede coexistir con la centralidad de la política. Lo que yo postulo es que la política está perdiendo su lugar central en la organización de la sociedad. Antes la política y el Estado representaban la punta, el vértice, la pirámide de la organización social; hoy ya no es así.

La política ha dejado de ser el núcleo rector que coordina y regula el con-

junto de los procesos sociales. Se halla en curso un debilitamiento decisivo de la soberanía externa e interna del Estado. La soberanía externa se ha debilitado por el proceso de globalización; la interna, porque si la política se basaba antes en el recurso fundamental del mando jerárquico, hoy este principio se ve cuestionado por la complejidad de la sociedad. La política ya no cuenta con la información suficiente para intervenir jerárquicamente, verticalmente, en los diversos procesos sociales. No me refiero solamente a la economía, sino también a otros campos como, por ejemplo, la ciencia y el arte. Cada uno de los campos de la sociedad cobra mayor autonomía, tiene su lógica y sus códigos propios y, por lo tanto, no permiten a la política interferir en sus prácticas particulares.

Junto al proceso de pérdida de centralidad de la política, hay un segundo momento que es complementario: *la informalización de la política*. Así como podemos hablar de la economía informal, así como en el mundo jurídico existe un derecho de facto, así también observamos un proceso de informalización de la política. Hasta hace poco la política estaba relativamente acotada por el sistema político. Las instituciones políticas marcaban el campo de la política y eso permitía distinguir entre la esfera política y la no política.

En la actualidad la política desborda el marco institucional del sistema político; y lo desborda desde “abajo” y desde “arriba”. Desde “abajo”: las iniciativas ciudadanas, la sociedad civil actual por ejemplo, o el conjunto de presencias ciudadanas que constituyen —digamos— una “zona gris” que no es directamente política (en términos de los partidos o de

las instituciones políticas), pero que tampoco podría llamarse apolítica o social. Desde “arriba”: otra “zona gris” en la que está prosperando una informalización de la política desde “arriba” se debe a —si se me permite llamarles así— las nuevas redes políticas (en inglés: *networks*). Actualmente, el Estado, que ya no cuenta con la información ni con los mecanismos suficientes para llevar a cabo políticas públicas, por ejemplo, requiere de la colaboración de otras instancias económico-sociales que a su vez no pueden resolver las cosas por sí solas. Hay una creciente interdependencia entre política y actores sociales y económicos que desemboca en la formación de redes políticas.

En México la prensa no es muy explícita al respecto. En Chile, por ejemplo, podría relatarles cómo una parte de la legislación se cocina a través de ese tipo de redes, ya sea la ley de telecomunicaciones, la de pesca o la reforma al sistema de salud. Al insertarse en la esfera política, estas redes congregan instancias de gobierno que, frecuentemente, están peleadas entre sí. ¿No acaso una buena parte de la política de gobierno se dedica a la pelea interna entre sus diversas instancias? Las instancias de gobierno interesadas en un tema particular se juntan con actores sociales y económicos interesados en el mismo tema, articulando así una coordinación horizontal hasta llegar a acuerdos sobre determinada materia. El tema de las redes políticas es central. En el futuro inmediato es preciso pensar en una fase posneoliberal, horrible término que describe con cierta precisión el momento actual en que el programa neoliberal está más o menos agotado. Lo veo en países como México y Chile. Lo crucial de esta fase es una articu-



lación específica de lo público y lo privado. El Estado por sí solo no puede hacer frente a la complejidad de la sociedad; tampoco el mercado por sí solo; ni la llamada sociedad civil por sí sola. Se requiere por lo tanto una articulación de estas instancias, que es el origen de las redes políticas.

Un tercer rasgo de la transformación actual de la política es la *reestructuración de lo público y lo privado* y de la interacción entre ambas esferas. Hay un movimiento doble. De un lado, la reestructuración de lo público se origina en el debilitamiento de la esfera pública y de la opinión pública en términos del ámbito ciudadano; por el otro, lo público no desaparece, sino que adquiere nuevas formas. Pienso, por ejemplo, que antes el mercado se limitaba a interacciones entre sujetos estrictamente pri-

vados y hoy está asumiendo un carácter cada vez más público. Un ejemplo: el control de calidad. Hoy en día, la economía —sobre todo economías como las nuestras, orientadas esencialmente hacia la exportación— requieren del control de calidad, que se vuelve una función pública. La defensa del consumidor es otro ejemplo. El mercado comienza así a producir funciones y responsabilidades públicas. De manera similar, en la esfera privada se observa otro movimiento doble. Por una parte, encontramos un proceso de privatización creciente: la llamada “cultura del yo”, ese retraimiento de lo público hacia el mundo privado, hacia el hogar y la intimidad. Es un proceso que no debe ser visto de manera unilateral como una simple privatización y un retraimiento de la esfera pública. La nueva valoración de lo

privado está redefiniendo la agenda pública. La experiencia privada introduce temas nuevos en el debate público. El caso más notable es el movimiento feminista, pero podemos observar el mismo principio multiplicado en otros ámbitos: la identidad étnica, las preferencias sexuales y una serie de temas que antes eran propios del ámbito privado y que ahora ingresan a la esfera y a la agenda públicas a partir de lo privado.

Aquí quisiera detenerme y pensar en voz alta: ¿qué significado pueden tener estas transformaciones de la política para los partidos políticos? Acaso es preciso reflexionar en el clima cultural en el que se mueve un partido actualmente. Cabe destacar de nuevo la noción de sociedad de mercado y de privatización. La ciudadanía de hoy no es una ciudadanía movilizadora, ardiente de participar en

grandes gestas éticas, sino una ciudadanía dedicada, esencialmente, a la vida privada. Y, reitero, a partir de ese vivir privadamente redefine intereses públicos. Hay, en efecto, una nueva conciencia ciudadana; pero a diferencia de lo que sucedía hace veinte o treinta años, ya no es una conciencia militante.

En este clima cultural se produce una complejidad creciente de nuestras sociedades. La creciente diferenciación social no se opera solamente en términos de estructuras de clase y estratificación social, sino también de diferencias entre campos sociales cada vez autónomos: la economía, el arte, la ciencia, la religión, etcétera. Como ya lo dije, cada uno de estos campos tiene códigos propios y su propia lógica: la lógica de la economía, la lógica de la política, la lógica de la ciencia, etcétera. Ello lleva a un colapso de los referentes político-sociales que existían hace veinte años. En definitiva: lleva a un colapso de las identidades colectivas. La identidad colectiva es, justamente, aquello que hace posible que múltiples aspectos de la vida de cada individuo adquieran coherencia colectiva; la identidad aporta la visión conjunta. Hoy esta visión es cada vez más difícil de lograr. Nuestra época se distingue por la creciente incertidumbre de la vida social. Pensemos en contraste con los célebres sesenta (o particularmente el 68), época de cambios. La incertidumbre actual es muy distinta.

La crisis de orientación que vivimos produce miedo a conflictos y a mo-

vimientos sociales, miedo a lo imprevisto. Lorenzo Meyer hablaba del miedo a la violencia, que es una situación extrema. Hay un creciente temor hacia los conflictos en general; miedo incluso a conflictos normales. De ahí que la estabilidad sea, ahora, el principal bien público. El sentimiento es de que somos responsables del pasado y también del futuro, y que no hay futuro si no lo hacemos en conjunto. La cooperación, la capacidad de llegar a acuerdos básicos, se ha vuelto un tema central de la vida pública.

La cooperación no suprime la confrontación. La vitalidad de la democracia reside, en principio, en que lleva los conflictos a cabo institucionalmente, pacíficamente. Uno de los conflictos centrales está vinculado a la alternancia en el gobierno. Para que exista la alternancia es preciso que la oposición cuente con una cultura de gobierno. Uno puede optar por convertirse en un partido testimonial como el Partido Comunista Francés: una comunidad cerrada que oscila eternamente entre el 10% y el 5% del electorado. Es una subcultura muy legítima. Pero si pensamos en un partido que quiere ser gobierno, entonces hay que desarrollar algún tipo de cultura de gobierno.

Otra condición para que exista la alternancia en el poder es la capacidad de plantear opciones. Les hago una de las preguntas más difíciles de la actualidad: ¿por qué al mismo tiempo que nos hallamos en una época con libertades sin precedentes, todo parece indicar que no hay otra

cosa que hacer que lo que estamos haciendo, que no existen otros caminos? Normalmente existen muchas opciones, siempre y cuando abandonemos la noción de una posibilidad global. Así como nos hemos liberado de la noción de planificación global o de las ideologías globales, tal y como las conocimos en los años sesenta, también llegó el día de pensar no en propuestas globales que conciban a la sociedad en su conjunto, sino en propuestas puntuales, sectoriales, orientadas a temas específicos. Es preciso construir un programa de partido con propuestas que sean puntuales y que coincidan, en algunos temas, con el gobierno en turno.

Una última observación. En una de las exposiciones anteriores se afirmaba que un partido como el PRD no podía ser un partido de centro; se aducían los elementos que Norberto Bobio introdujo en el debate sobre las ideologías de izquierda y derecha. Creo que una cosa es esa definición ideológica y otra muy diferente es que, en política, la lucha se da por el centro. Finalmente, toca al gobierno situarse en el centro del panorama político. En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español se fue hacia la derecha no por traición; tampoco Chirac, ahora en Francia, traicionó moviéndose hacia la izquierda. La pregunta es: ¿dónde se sitúa el centro y cómo se desplaza de un lugar a otro? La lucha política, insisto y termino, es una lucha por ocupar el centro. ○

INFORME PNUD: CÓMO VEN LOS LATINOAMERICANOS A SU DEMOCRACIA

La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos

En mayo de 2002 se realizó una encuesta sobre las percepciones ciudadanas de la democracia. Incluyó 18.643 casos, cubriendo una población de más de 400 millones de habitantes en los dieciocho países comprendidos en el Informe. Una primera mirada a las percepciones ciudadanas sobre la base de las anteriores encuestas de Latinobarómetro indica que hacia 1996 el 61

por ciento de los entrevistados a nivel de la región prefería la democracia respecto de cualquier otro régimen; hacia 2002 era el 57 por ciento. Esa preferencia por la democracia no implica necesariamente un firme apoyo. En efecto, muchas personas que dicen preferir la democracia frente a otros regímenes tienen actitudes poco democráticas en relación con diversas cuestiones sociales. En el año 2002, casi la

mitad (48,1 por ciento) de los encuestados que decían que preferían la democracia a cualquier otro régimen, prefería igualmente el desarrollo económico a la democracia, y un porcentaje semejante (44,9 por ciento) que decía preferir la democracia estaba dispuesto a apoyar a un gobierno autoritario si éste resolvía los problemas económicos de su país.

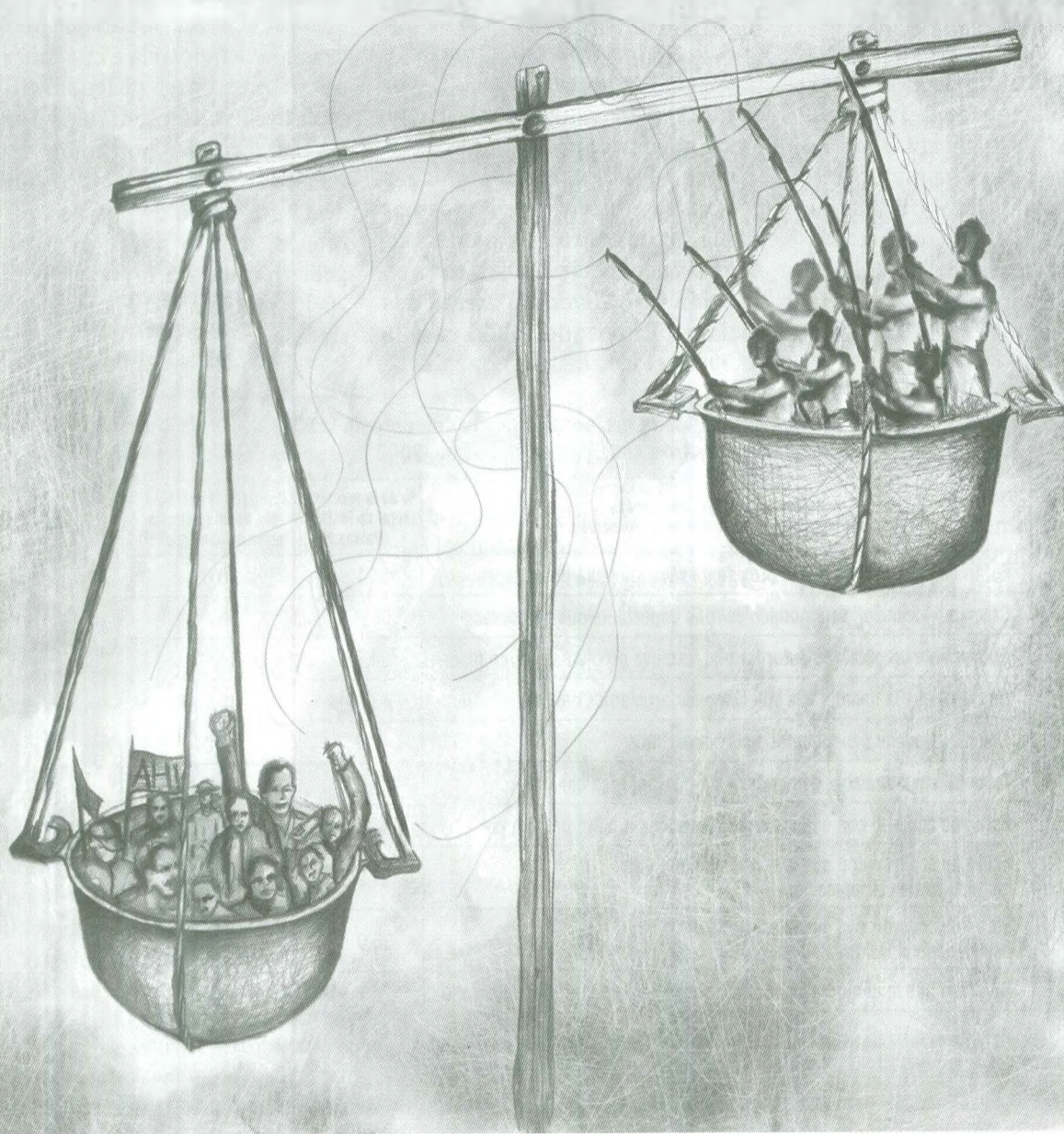
**Fragilidades de la preferencia por la democracia
frente a otros sistemas de gobierno, 2002**

Actitudes específicas relacionadas con la vigencia e importancia de la democracia	% de la muestra total de los 18 Países	Prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno (%)
Están de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes	58,1	38,6
Creer que desarrollo económico es más importante que democracia	56,3	48,1
Apoyarían a un gobierno autoritario si resuelve problemas económicos	54,7	44,9
No creen que la democracia solucione los problemas del país	43,9	35,8
Creer que puede haber democracia sin partidos	40,0	34,2
Creer que puede haber democracia sin un Congreso nacional	38,2	32,2
Están de acuerdo con que el presidente ponga orden por la fuerza	37,2	32,3
Están de acuerdo con que el presidente controle los medios de comunicación	37,2	32,4
Están de acuerdo con que el presidente deje de lado al Congreso y los partidos	36,0	32,9
No creen que la democracia sea indispensable para lograr el desarrollo	25,1	14,2

Nota: varía entre 16.183 (puede haber democracia sin congreso) y 17.194 (la democracia no es indispensable para el desarrollo).
Tomado de: Informe del PNUD, La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Abril del 2004

No. No aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar.

Bertold Brecht



DESPUÉS DEL SAQUEO

EL CAPITALISMO LATINOAMERICANO A COMIENZOS DEL NUEVO SIGLO*

Atilio A. Borón

Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso

El ataque a la democracia

Un aspecto que quisiéramos examinar en estas páginas es el relativo al debilitamiento sufrido por nuestros países a causa del efecto corrosivo de las políticas del Consenso de Washington. Estas, lejos de haber consolidado nuestras nacientes democracias, operaron en un sentido exactamente inverso, y las consecuencias las estamos pagando hoy. Es por eso que luego de un período de casi dos décadas los logros de los capitalismos democráticos latinoamericanos no lucen como demasiado excitantes ni atractivos. La sociedad actual es más desigual e injusta que la que le precediera. Si entre 1945 y 1980 los países latinoamericanos experimentaron un módico progreso en dirección de una cierta mayor igualdad social, y si en ese mismo período experiencias de distinto tipo, desde variantes del populismo hasta algunas modalidades del desarrollismo, se las ingeniaron para sentar las bases de una política que en algunos países fue agresivamen-

te “inclusionista” y tendiente a “ciudadanizar” a grandes sectores de nuestras sociedades otrora privados de todo derecho, el período que se inicia a partir de la crisis de la deuda tiene un signo manifiestamente contrario. Se cancela una tendencia y se inicia otra, en sentido exactamente contrario al anterior. En esta nueva fase, celebrada como la definitiva reconciliación de nuestros países con los inexorables imperativos del mercado y la globalización, viejos derechos –como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social– fueron abruptamente “mercantilizados” y convertidos en inalcanzables mercancías, lanzando a grandes masas de nuestras sociedades a la pobreza y la indigencia; las precarias redes de solidaridad social fueron demolidas al compás de la fragmentación social ocasionada por las políticas económicas ortodoxas y el desenfrenado individualismo promovido por los nuevos valores dominantes que proyectaban los amos del mercado tanto como la dirigencia política que comandaba

estos procesos; y los actores colectivos y las fuerzas sociales que en el pasado canalizaron las aspiraciones y las demandas de las clases y capas populares –los sindicatos, los partidos populistas y de izquierda, las asociaciones populares, etc.– fueron debilitados o simplemente barridos de la escena. De este modo los ciudadanos de nuestras democracias se vieron atrapados por una situación paradójica: mientras que en el “cielo” ideológico del nuevo capitalismo democrático se exaltaba la soberanía popular y el amplio repertorio de derechos consagrados constitucionalmente, en la prosaica “tierra” del mercado y la sociedad civil los ciudadanos eran despojados prolijamente de esos derechos por medio de crueles y acelerados procesos de “desciudadanización” que los marginaban y excluían de los beneficios

* Con autorización del autor, este texto fue tomado, de: Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Introducción a la edición del 2003 (primera edición de Clacso corregida y ampliada) Buenos Aires: Clacso, 2003.

del progreso económico y la democracia.

En nuestros países, en suma, la democracia corre el riesgo de ser ese “casarón vacío” del que tantas veces ha hablado Nelson Mandela, en donde medra una clase política cada vez más irresponsable y corrupta, indiferente ante la suerte de la ciudadanía. Que esto ya es así lo demuestra la enorme desconfianza popular ante la clase política, los partidos y los parlamentos, un fenómeno que se registra en cada uno de los países de la región, si bien en no todos los casos con similar intensidad.

No debiera sorprendernos, en consecuencia, encontrar que los resultados de las encuestas de opinión pública en América Latina demuestran altos niveles de insatisfacción con el desempeño de nuestros regímenes democráticos. Mediciones recientes hechas por Latinobarómetro han arrojado resultados sumamente preocupantes: sólo el 25% de la población de la región se declaraba satisfecho con la democracia en 2001 pese a que en 1997 esa proporción alcanzaba al 41%. No sorprende entonces comprobar que el apoyo al régimen democrático haya también descendido hasta llegar al 48% de una muestra de diecisiete países de América Latina. En relación a la satisfacción, sólo dos países contaban con una proporción mayor del 50% que se declaraban “satisfechos” ante el funcionamiento de la democracia: Uruguay (55%) y Costa Rica (51%). En México sólo 26% compartía este sentimiento, 23% en Chile, 21% en Brasil, 20% en Argentina y 10% en Colombia¹. En los meses posteriores al colapso económico e institucional de la Argentina, el índice de satisfacción descendió hasta un abismal 7%².

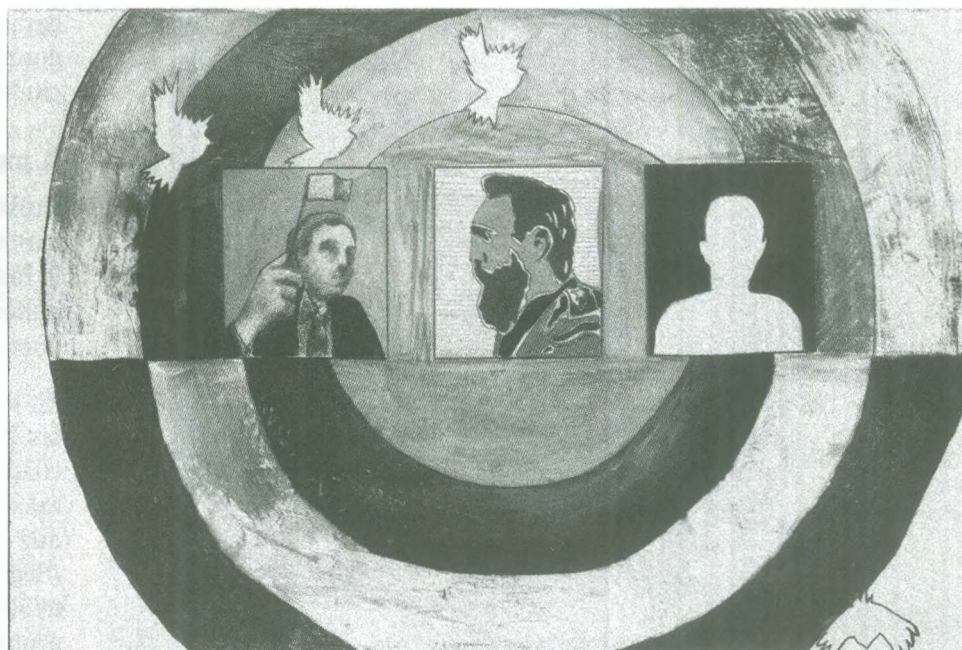
En términos más generales podría decirse que lo que ocurre es que, en el nuevo contexto ideológico signado por el primado del neoliberalismo, la participación ciudadana en la cosa pública fue sistemática y sutilmente desalentada. La “norteamericanización” de la política latinoamericana visible en las campañas políticas, la dilución ideológica de la competencia electoral, la obsesión de los grandes partidos por ocupar el “centro” del espectro ideológico, y el primado de la videopolítica, con sus insulsos discursos y sus rebuscados estilos publicitarios, también se deja sentir en la persistente promoción de la indiferencia y la apatía políticas. Estas últimas son típicas de la vida pública de Estados Unidos, y lejos de ser rasgos circunstanciales, obedecen al diseño constitucional forjado por los padres fundadores de la constitución norteamericana que no ahorraron argumentos para desalentar, o impedir, la participación de la plebe en los asuntos públicos. Así, Estados Unidos es el único país del mundo en el que las elecciones—presidenciales, legislativas o de gobernadores—se realizan en días laborales. No hay feriado que facilite la participación ciudadana en el acto electoral. En el caso latinoamericano, el desaliento a la participación política tiene que ver en primer lugar con la satanización experimentada por el Estado y, junto a él, por todo lo perteneciente a la esfera pública. La propaganda neoliberal ha cosechado un gran éxito al hacer que la esfera pública sea percibida como un ámbito en donde prevalecen la corrupción, la venalidad, la irresponsabilidad y la demagogia. Un lugar, en síntesis, en el que ninguna persona honesta debería preocuparse por estar. Este proceso contrasta vivamente con la simétrica exaltación de las virtudes

del mercado y, posteriormente, de la “sociedad civil”, concebida ésta sin ninguna de las diferenciaciones clasistas, sexistas y racistas que la marcan indeleblemente en los capitalismo contemporáneos³.

A lo anterior habría que agregar dos consideraciones adicionales: el hecho de que las estrategias colectivistas de intervención política hayan caído igualmente en desgracia en favor del acérrimo individualismo que prevalece en los mercados, y la banalización de la política y de las instancias participativas de la ciudadanía—ejemplificados en la dictadura de los mercados y en el hecho de que éstos, como lo recordaba George Soros, “votan todos los días”—, lo que terminó por ahuyentar a los ciudadanos de los comicios y promover la “privatización” de sus actividades. Si todos los partidos elaboran un mismo discurso, si todos pretenden captar un supuesto “centro” político e ideológico, si nadie quiere diferenciarse y exponerse a la condena de los dueños del dinero, y si todos se empeñan en gobernar en función de los dictados del mercado, ¿para qué molestarse en buscar información, registrarse e ir a votar?

En suma: difícilmente podría sostenerse que un “paraíso neoliberal” de las características que conocemos en nuestra región sea demasiado propenso al desarrollo de una sociedad integrada y sin exclusiones, o al sostenimiento de la democracia

1. Latinobarómetro 2001. www.latinobarometro.org/ano2001.
2. VENTURA, Adrián. Los argentinos, insatisfechos con la eficacia de la democracia. En: La Nación. Buenos Aires: 23 de septiembre, 2002. Pág. 7.
3. Para una excelente discusión sobre la sociedad civil consultar Ellen Meiksins Wood. Democracia contra capitalismo. México D.F. Siglo XXI Editores, 2000 (1995).

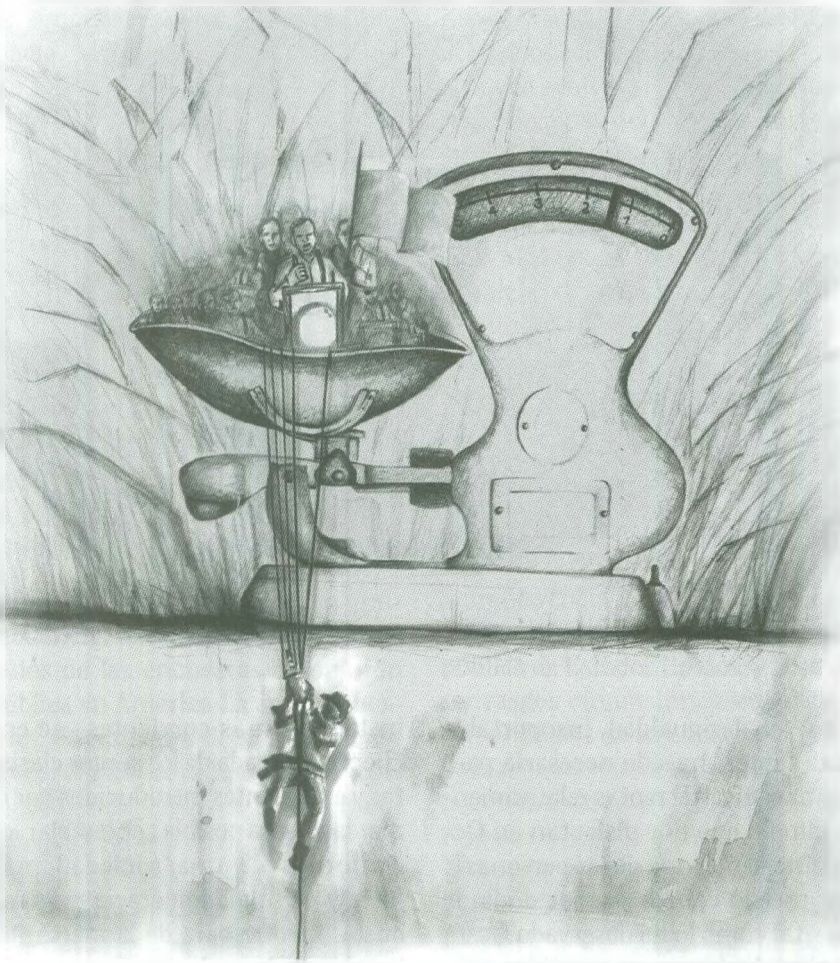


política y la participación ciudadana en la vida pública. Más bien parecería ser el escenario propicio para el resurgimiento de nuevas formas de despotismo político. En consecuencia, las insustanciales democracias de América Latina están sufriendo los embates no ya de las “reformas orientadas al mercado”, como eufemísticamente se las llama, sino de una auténtica contrarreforma social dispuesta a llegar a cualquier extremo con tal de preservar y reproducir las estructuras de la desigualdad social y económica de nuestra región, con todos los privilegios que ellas representan para los grupos dominantes. Esta contrarreforma tiene por objetivo declarado hacer que los rigores del mercado actúen como incentivos para motivar conductas supuestamente más racionales e innovadoras de los agentes económicos. Esta es la línea fundamental de los razonamientos de F. von Hayek, y su intransigente prédica en contra del igualitarismo y el colectivismo⁴. En sus propias pala-

bras: “la desigualdad, insoportable para tantos, ha sido necesaria para lograr el nivel de rentas relativamente alto de que hoy disfrutan en Occidente la mayoría de las personas”⁵. Por eso no cabe la menor duda de que, tal como lo ha observado Gosta Esping-Andersen en repetidas ocasiones, un buen indicador de la mayor o menor justicia social existente en un país está dado por el grado de “desmercantilización” de la oferta de bienes y servicios básicos requeridos para satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres concretos que constituyen una comunidad. La “desmercantilización” significa que una persona puede sobrevivir sin depender de los caprichosos movimientos del mercado. Ella “fortalece al trabajador y debilita la autoridad absoluta de los empleadores. Esta es, exactamente, la razón por la cual los empleadores siempre se opusieron a ella”⁶. Allí donde la provisión de la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la seguridad social –para citar las

instancias más corrientes– se encuentre liberada de los sesgos clasistas y excluyentes introducidos por el mercado, será posible contemplar los contornos de una sociedad más justa y de una democracia más robusta. La otra cara de la mercantilización es la exclusión, porque ella significa que sólo quienes tienen dinero suficiente podrán adquirir bienes y servicios que en otras sociedades son inherentes a la condición ciudadana. Por el contrario, allí donde aquellos dependan del desigual acceso de sus habitantes en función de sus recursos económicos –es decir, ya no más concebidos como derechos ciudadanos de universal adjudicación– tropezaremos con la injusticia y todo el repertorio de

4. Friedrich A. von Hayek. *The Road to Serfdom*. Chicago: The University of Chicago Press, 1944.
5. Friedrich A. von Hayek. *Democracia, Justicia y socialismo*. México: Diana Hayek, 1978. Pág. 53.
6. Gosta Esping-Andersen. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press, 1990, 22.



sus aberrantes manifestaciones: indigencia y pobreza, desintegración social y anomia, ignorancia, enfermedad, las múltiples formas de la opresión y sus deplorables secuelas. Los países escandinavos y América Latina muestran los contrastantes alcances de esta dicotomía: por una parte, una ciudadanía política efectiva que se asienta sobre la universalidad del acceso a bienes y servicios básicos concebidos como una suerte de innegociable “salario del ciudadano” ya incorporado al “contrato social” de los países nórdicos y, de manera un tanto más diluida, al de las formaciones sociales europeas en general. El “salario del ciudadano” significa, en buenas cuentas, un certificado en contra de la exclusión

social porque garantiza por la vía política e institucional el disfrute de ciertos bienes y servicios que, ante la ausencia de tal instituto, deben adquirir en el mercado aquellos sectores cuyos ingresos los facultan a ello⁷. Por el contrario, las “nuevas democracias latinoamericanas”, con su mezcla de inconsecuentes procesos de ciudadanización política cabalgando sobre una creciente “des-ciudadanización económica y social”, culminan en una ciudadanía formal y fetichizada, vaciada de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos. De ahí que al cabo de tantos años de transiciones democráticas tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de libre mercado, cuyo objetivo supremo es

garantizar la ganancia de las clases dominantes y no el bienestar de la ciudadanía.

A modo de conclusión

Quisiéramos concluir esta revisión panorámica de la última década de la historia latinoamericana con algunos interrogantes y algunas propuestas.

En primer lugar, conviene recordar las palabras de Walter Benjamin cuando dijera que “no hay síntoma más serio de la gravedad de la crisis que las cosas sigan como están”. ¿Seguirán como están? La coalición neoliberal en América Latina ha probado ser extraordinariamente poderosa e influyente. Las perspectivas de cambio que se abrieron con el ascenso del PT a la presidencia del Brasil a comienzos del 2003 parecen haberse diluido, toda vez que las políticas económicas implementadas por el gobierno Lula se inscriben, al menos hasta la redacción de estas líneas, dentro de los parámetros del Consenso de Washington.

El efecto-demostración de Brasil era importantísimo para potenciar la elaboración de políticas post-neoliberales en los otros países de la región. Pero el chantaje imperialista, unido a la extorsión interna que practican los “señores del dinero” y sus permanentes amenazas de producir un “golpe de mercado” o de promover una huelga de inversiones en el Brasil, parecen haber logrado poner de rodillas a un gobierno que llegó al Planalto rodeado de una inmensa legitimidad popular y que, poco tiempo después, adoptó un curso

7. Samuel Bowles y Herbert Gintis. The crisis of liberal democratic capitalism: the case of the United States. In: *Politics and Society*, Vol. II, N° 1, 1982. Págs. 70-78.

de acción animado por la suicida obsesión de pretender “tranquilizar a los mercados”. Ese y no otro fue el principio cardinal que orientó la política del gobierno de la Alianza en la Argentina, y que condujo a Fernando de la Rúa a un final apocalíptico y sangriento. Esta lección parece no haber sido aprendida por los actuales gobernantes brasileños.

Al momento de escribir estas líneas al gobierno de Lula le quedan poco más de seis meses para corregir su rumbo y evitar su eventual capitulación. Si esto llegara a acontecer, el futuro de las políticas post-neoliberales en América Latina se vería muy seriamente comprometido. En efecto, el PT es el primer partido que se hizo cargo del gobierno después del diluvio neoliberal, con el mandato de poner en marcha un programa post-neoliberal de reconstrucción económica y social. En Argentina, siempre pionera en materia de infortunios, el derrumbe del neoliberalismo se consumó mucho antes pero su alternativa política aún no pudo constituirse. La tradicional incapacidad de los sectores de la izquierda y centro-izquierda para constituir una alianza, siquiera electoral, para poner coto a las ambiciones de la derecha, conspiró en contra de la construcción de dicha alternativa. En el caso del Brasil, en cambio, su gravitación internacional, su enorme extensión geográfica, el tamaño de su población, y la complejidad de su estructura económica, hacen que un presidente instalado en Brasilia cuente con un margen de maniobra inimaginable para cualquier otro de la región. Si Brasil no pudiera salir de la trampa del neoliberalismo y ensayar la aplicación de políticas post-neoliberales, ¿quién podría hacerlo?

Ahora bien, en caso de que la experiencia de Lula no concluyera como se espera, y teniendo en cuenta la indudable gravitación del Brasil en toda América Latina, parecería pertinente preguntarnos hasta qué punto este tipo de sociedad, que emerge tras el diluvio neoliberal, puede ser el sostén histórico de un proceso de democratización, o la plataforma desde la cual se construya una convivencia civilizada y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana. ¿No deberíamos más bien esperar el surgimiento de fuertes tendencias hacia el mesianismo político, o hacia un fundamentalismo de derecha en caso de que los agentes de cambio y las fuerzas populares fracasasen en su empeño por cambiar el rumbo de la historia? ¿No estaremos, acaso, en presencia de un ominoso huevo de la serpiente neofascista?

Ante las protestas y los anhelos de cambio de las grandes mayorías de América Latina, los publicistas de la derecha insisten en la inexistencia de alternativas. Estamos condenados a esto, nos dicen. Cualquier otra cosa es un peligroso voluntarismo que se ilusiona con doblegar a las fuerzas inexpugnables de la globalización. Es más, los neoliberales no se cansan de plantear a sus adversarios la siguiente pregunta: ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es su modelo alternativo al de libre mercado?

En primer lugar es preciso rechazar de plano el supuesto de que para salir de la crisis actual es preciso contar con un modelo altamente elaborado en el plano de la teoría. Esto jamás ha ocurrido en la historia económica internacional. No ocurrió con el keynesianismo, cuya codificación fue posterior a la adopción de las nuevas políticas de inter-

vención estatal puestas en marchas por los gobiernos antes de que en 1936 apareciera la *Teoría general* de Keynes⁸. Tampoco ocurrió con el neoliberalismo, cuyas políticas, si bien se inspiraron en la producción teórica de Milton Friedman y Friedrich von Hayek⁹, tuvieron más que ver con las iniciativas concretas tomadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos a comienzos de la década de los ochenta que con los postulados de una secta esotérica que año tras año se reunía casi clandestinamente en Mont Pélerin, Suiza¹⁰.

En segundo lugar, es posible establecer algunas orientaciones básicas de lo que debería ser una política post-neoliberal. Se requiere, antes que nada, dar una batalla sin tregua para lograr una auténtica reforma del Estado. Es completamente ilusorio pensar que sin una reconstrucción integral del orden estatal podrá haber salida a la crisis. Para ello se requiere como mínimo tomar un conjunto de medidas, entre las cuales sobresalen las siguientes:

— El fortalecimiento fiscal del Estado. Un Estado pobre, carente de recursos, no puede desempeñar un papel positivo en la resolución de la crisis y sólo contribuye a agravarla.

8. John M. Keynes. *Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*. México: Fondo de Cultura Económica, 1943 (1936).

9. Milton Friedman. *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press, 1962 y Milton Friedman y Rosa Friedman. *Libertad de Elegir*. Barcelona: Grijalbo, 1980.

10. Cf. Perry Anderson. *Neoliberalismo: un balance provisorio*. En: Emir Sader y Pablo Gentili, compiladores. *La trama del neoliberalismo*. Buenos Aires: Clacso, 2003. Pág. 25.

– La jerarquización de la administración pública. No hay Estado eficiente y operativo con servidores públicos mal pagos y carentes de reconocimiento social.

– La realización de una profunda reforma en el orden administrativo y burocrático tendiente a reorganizar el conjunto de los aparatos estatales en función de las nuevas e impostergables tareas que debe realizar.

– Lucha frontal contra la corrupción, porque un Estado corrupto poco y nada puede hacer, salvo enriquecer a los delincuentes que sobornan desde el mercado y la sociedad civil y a quienes aceptan el soborno desde la administración pública.

– Redefinición de una nueva estrategia de intervención del Estado en la vida económica y social, a partir de la constatación del hecho que las viejas modalidades e instrumentos propios de la era keynesiana requieren urgentes e imprescindibles modificaciones.

– Mejorar los mecanismos de funcionamiento estatal, a fin de posibilitar la mayor transparencia y control ciudadano del proceso de toma de decisiones. Una experiencia digna de tener en cuenta es la del presupuesto participativo implementada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Pero estas medidas remiten, en última instancia, a la “madre de todas las batallas”: la reforma tributaria. En efecto, ninguna reforma del Estado digna de ese nombre será posible en los Estados latinoamericanos sin cortar de raíz la Hidra de las Siete Cabezas del “veto contributivo” que hasta hoy ejercen las clases dominantes. Sin atacar esta pesada herencia que proviene de la época colonial –¡los conquistadores y co-



lonizadores no debían pagar impuestos, sino recibir tributos de los nativos!— no habrá Estado dotado de las capacidades mínimas necesarias para estar a la altura de los desafíos

de la hora actual. Esto supone, entonces, acabar con tan perversa tradición que gozan los ricos y las grandes empresas, situación tan escandalosa que hasta los propios

informes y estudios del FMI parecen libelos ultra-izquierdistas más que documentos elaborados por fríos tributaristas. La lucha contra esta lacra social presupone asimismo un combate contra la evasión y la elusión tributaria, y el diseño de una estructura impositiva que abandone la radical regresividad actual y la sustituya por un modelo de tributación progresiva. No es una meta descabellada proponer que, en un plazo de cinco años, la estructura tributaria de nuestros países adopte parámetros similares –no iguales, pero similares– a los que se registran en promedio no en los países nórdicos sino en la Unión Europea. Si no se hace es sencillamente porque falta la voluntad política para que en este mundo globalizado las empresas europeas, americanas y japonesas paguen impuestos aproximadamente semejantes a los que abonan sin chistar en sus propios países.

Un programa post-neoliberal exige, en segundo lugar, poner en marcha una profunda reforma política que perfeccione radicalmente la calidad de nuestras instituciones y prácticas democráticas. Esto supone garantizar mejores dispositivos para hacer efectiva la soberanía popular, condición esencial de cualquier régimen democrático. Por ejemplo, afinar instrumentos tales como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular para hacer que la soberanía popular sea algo más que una invocación retórica; mejorar los sistemas de representación política; hacer que las legislaturas sean mucho más receptivas ante las demandas ciudadanas; instituir la revocabilidad de los mandatos; imaginar mecanismos que faciliten una mejor selección de los dirigentes de los partidos políticos y otras

medidas similares que potencien el control democrático y “desde abajo” de los procesos de formación de la decisión pública.

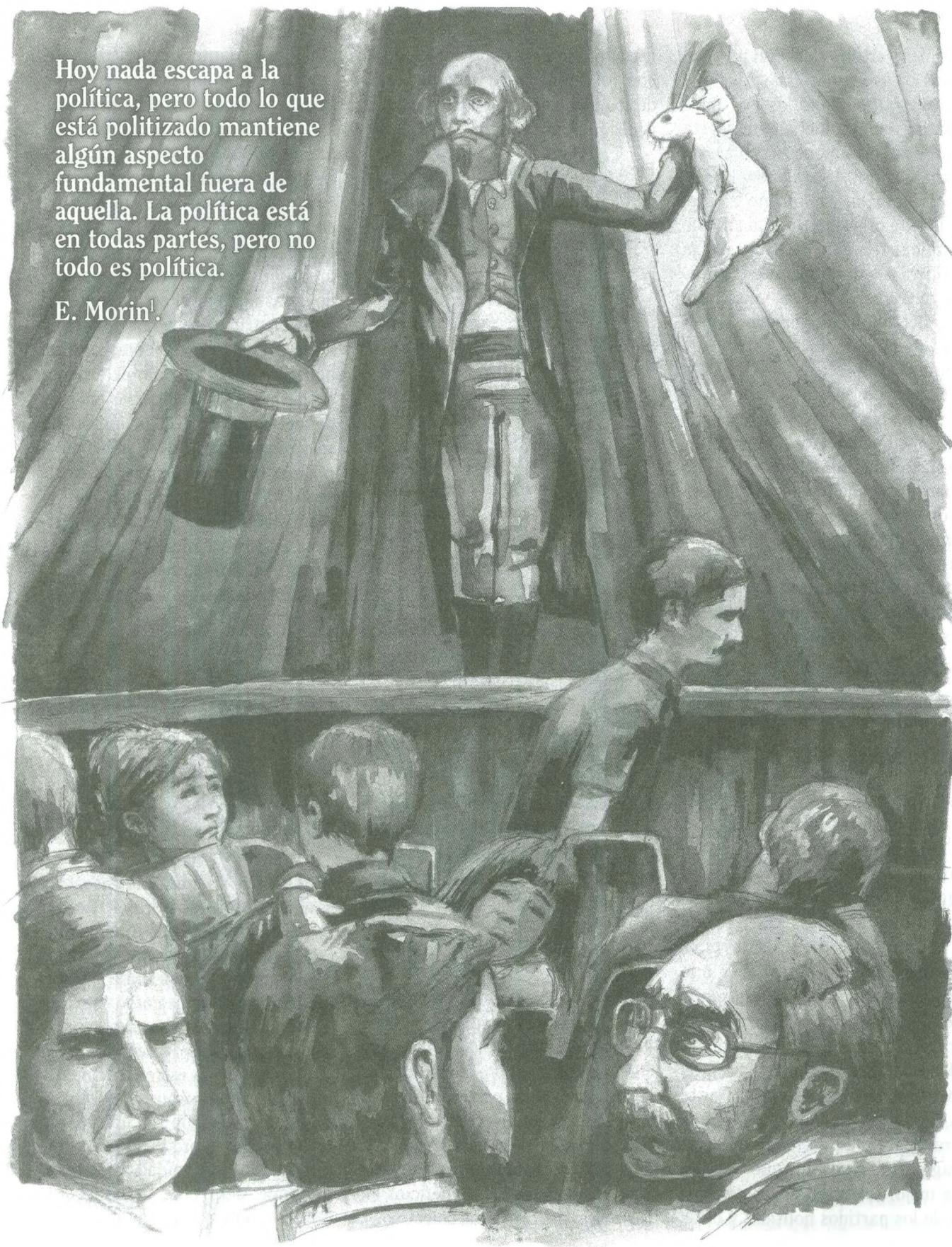
Para ello resulta imprescindible, en consecuencia, emancipar a la política de los mercados. En nuestros días la política es financiada por las empresas y por los sectores adinerados. La política se ha convertido, en esta era *mass-mediática*, en una actividad sumamente onerosa que en nuestros países financian los ricos y poderosos. No es sino natural que, una vez elegidas, las nuevas autoridades gobiernen en exclusivo provecho de sus mandantes y financistas. Si tuvieran un improbable ataque de amnesia, algún que otro oportuno “golpe de mercado” les refrescaría la memoria inmediatamente. Por lo tanto, el financiamiento público y transparente de la vida política se constituye en un dato fundamental del nuevo ordenamiento democrático, mientras el acceso irrestricto a los medios de comunicación de masas es el otro pilar de una democracia perfeccionada. Pero ambas cosas suponen la existencia de un Estado dotado de recursos suficientes. Y aquí vemos cómo se cierra perfectamente bien el círculo de la dominación plutocrática: se exige la reducción del gasto público y de la “carga impositiva,” a resultados de lo cual un Estado débil no puede financiar pública y transparentemente la vida política, con lo cual ésta pasa a depender exclusivamente de las clases y grupos dominantes, los únicos que cuentan con el dinero para financiar la actividad de los partidos. Una vez concluido el acto electoral, los buitres adinerados se presentan por otra ventanilla del Estado para exigir toda clase de prebendas y beneficios en desmedro del bienestar colectivo.

Por último, lo anterior requiere inexorablemente la puesta en vigor de nuevas políticas estatales orientadas a la provisión de un conjunto de bienes públicos que en épocas recientes sufrieron agudos procesos de “mercantilización”. Ése y no otro fue el camino recorrido por las naciones europeas en la segunda posguerra, un camino que permitió en un mundo devastado por el conflicto bélico la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil. Estas nuevas políticas públicas, completamente antitéticas en relación a las emanadas del Consenso de Washington, no sólo representan un fin noble en sí mismas sino que, además, constituyen un aporte fundamental para la reconstrucción de una sólida legitimidad democrática que a su vez es imprescindible para dotar al Estado de la fortaleza requerida para disciplinar a las fuerzas del mercado, encuadrar a los grandes capitales y neutralizar la presión de otros Estados más poderosos. Un Estado, en una palabra, que recupere la soberanía económica y política perdida, que perfeccione el orden político y que permita emprender la imposterizable reconstrucción de la sociedad civil.

Quisiera terminar estas líneas recordando las sabias palabras de Bertolt Brecht con las cuales iniciáramos este prefacio. Ellas son más apropiadas que nunca para orientar nuestra práctica en tiempos como éstos. Si queremos cambiar el mundo, y no sólo contemplarlo o interpretarlo, el punto de partida es ser totalmente intransigentes en nuestro rechazo de la barbarie que el capitalismo como modo de producción ha impuesto a la humanidad. Este texto pretende, dentro de sus modestos límites, alimentar esa actitud. ③

Hoy nada escapa a la política, pero todo lo que está politizado mantiene algún aspecto fundamental fuera de aquella. La política está en todas partes, pero no todo es política.

E. Morin¹.



LA POLÍTICA Y SUS CRISIS

NUEVOS: ESCENARIOS, ACTORES, ROLES Y FORMAS ORGÁNICAS

Pablo Emilio Angarita Cañas

Profesor, Director del Centro de Investigaciones Jurídicas, Coordinador del Grupo interdisciplinario de investigación sobre Conflictos y Violencias, del Iner, de la Universidad de Antioquia. pabloe@elsitio.net.co

Son cada vez más frecuentes las preguntas sin respuesta acerca del comportamiento político de nuestros ciudadanos, el callejón sin salida en que parecieran hallarse todos los partidos de derecha e izquierda y, la casi imposibilidad de construir una identidad nacional y social. En medio de esta “confusión de ideas”, desde ciertos sectores sociales se “pone de moda” hacer política levantando la bandera de “lucha contra la clase política” y hasta contra la “política” misma, en el sentido tradicional en que la hemos conocido y con esa bandera logran éxitos electorales importantes.

Nuestras hipótesis interpretativa de los “nuevos tiempos para la política”, son²:

– Hay fuertes signos indicadores del inicio de una nueva época histórica, caracterizada por cambios en todos los ámbitos de la forma de funcionamiento económico, de organización social, de actuar políticamente y, de

profundas transformaciones culturales en la vida de los pueblos.

– Se presentan nuevas formas de relacionamiento entre el Estado y la “sociedad civil”; el primero viene cambiando su antiguo rol y, con ello, al interior de la sociedad emergen nuevos actores sociales y políticos.

– Inusitados espacios temáticos ingresan al nuevo mundo de la política, reconvirtiendo los anteriores escenarios y permitiendo que irrumpen en ellos actores políticos antes desconocidos, quienes abordan temas y prácticas igualmente innovadoras.

– La conformación de nuevos escenarios para la política y la irrupción en ellos de nuevos actores, es lograda, entre otras cosas, por la lenta e imperceptible revolución silenciosa que deshizo las fronteras entre lo público y lo privado.

– Los partidos políticos anteriormente fueron instrumentos privilegiados

y adecuados para la mediación entre la “sociedad política” y la “sociedad civil”, pero, ante la nueva realidad se encuentran en profunda e irreversible crisis, demandando otras características para sus mediadores. Hoy emergen movimientos sociales y políticos, muchos de los cuales se presentan bajo la forma de “redes de redes”, que tratan de desplazar a los partidos y le disputan la representación política.

– La actuación política de estos movimientos sociales y/o políticos, en las condiciones concretas de Colombia, aunque tiene como referente implícito o explícito al Estado, sin embargo no necesariamente se des-

1. MORIN, Edgar. Fronteras de lo político. Revista de Occidente, N° 168, mayo de 1995. Págs. 5-18.
2. Un desarrollo más amplio de estas tesis se encuentra en el primer capítulo de mi trabajo de grado de la Maestría en Ciencias Políticas, titulado: Movimientos Sociales y Políticos Alternativos en Medellín 1990-1995. Biblioteca Central, Universidad de Antioquia. Medellín, 1996.

envuelve por canales institucionales. Su presencia adquiere gran versatilidad. Despliegan múltiples acciones, por lo general en confrontación con las políticas estatales, en medio de las cuales se fortalecen. Su comportamiento político no es posible leerse con los tradicionales cánones establecidos hasta ahora para la política.

— Esta realidad emergente ha creado nuevas condiciones para el actuar político. Los partidos que pretendan sobrevivir deberán cambiar sus formas tradicionales de acción y relación con los movimientos sociales, así como de sus estructuras orgánicas. Estamos presenciando la convivencia de antiguas y nuevas prácticas políticas, junto con antiguas y nuevas formas organizativas, lo cual viene configurando diferentes maneras de relación entre el Estado y la “sociedad civil”, y estructura un *nuevo modelo de la política*.

Proceso histórico de la política

Bobbio, recuerda que el término de política, ha sido transmitido durante siglos por el influjo de la gran obra de Aristóteles, que lleva el mismo nombre, *“derivado del adjetivo de Polis (politikos), que significa todo lo que se refiere a la ciudad y, en consecuencia, ciudadano, ciudad, público y también social y sociable”*³. En la tradición clásica, dice Bobbio, *“La política entendida como todo lo que afecta a la vida de la Polis, incluye todo tipo de relaciones sociales, de tal modo que lo político coincide con lo social...”*⁴.

En el devenir histórico se fue separando lo político de lo social, hasta llegar a una visión “restrictiva” de lo político. El cristianismo sustrajo del dominio de la esfera de la política la

vida religiosa, luego con el surgimiento de la sociedad mercantil la burguesía suprimió de la esfera de la política el control sobre las relaciones económicas, generando la contraposición entre “sociedad civil” y “sociedad política”, de esfera privada o de lo burgués y de esfera pública o del ciudadano, que también era desconocido por el mundo antiguo⁵. Es con la llegada a la modernidad como se va imponiendo en el “mundo occidental” el concepto de política, como un arte o función estrechamente vinculada a los Estados, y por ese camino a la confusión de lo público con lo estatal, cayendo en un reduccionismo cuyo resultado más negativo ha sido la despolitización no sólo de la sociedad, sino lo que es peor, del propio Estado⁶.

La confusión de lo público con lo estatal hizo que estos dos espacios de acción política marcharan cual siameses, para desembocar en la situación de hoy en la cual la crisis de los Estados se expresa como crisis de la política, en una interminable retroalimentación negativa, generando procesos en los cuales la sociedad desatiende lo público y se desinteresa por la política. Esto ocurre, tanto en varios países del “Norte” como del “Sur” (Latinoamérica), la crisis del Estado adquiere una especial presencia en tanto “crisis de representación”, la cual, a su vez, produce el doble efecto, de debilidad y fortaleza, de modo que en tanto el Estado es menos hegemónico ante la sociedad, *resulta más débil* —políticamente hablando— en cuanto representante de ésta; registrándose ello en indicadores como “pérdida de legitimidad”, lo cual hace que los Estados débiles frecuentemente pretenden fortalecerse, por lo general, con la hipertrofia de su aparato burocrático-militar⁷.

Todo el período de la modernidad, particularmente desde mediados del siglo XIX hasta hoy, muestra que el escenario privilegiado de la política lo constituyó el Estado. Así mismo, los actores que centrípetamente se desplazaban en torno a él no eran otros que los partidos o movimientos políticos.

Modernidad, democracia y partidos

Han sido los colectivos de partido, la expresión política de la sociedad moderna, la mediación entre la sociedad civil y el Estado. Muchos coinciden en señalar que la fortaleza o debilidad de la democracia política contemporánea, depende a su vez, de la vitalidad o no de sus partidos. Por ello, su desarrollo resulta ser un indicador muy importante del grado de madurez democrática de dicha sociedad⁸.

Las exigencias de “libertad e igualdad” de los ciudadanos, expresadas en términos del ejercicio del poder, así como la consolidación de los Estados de derecho, contribuyeron a la

3. BOBBIO, Norberto. Política. En: Diccionario Político. T. II. Pág.1240-1.

4. Ibid. Pág.1.248-2.

5. Ibid. Pág. 1248-2.

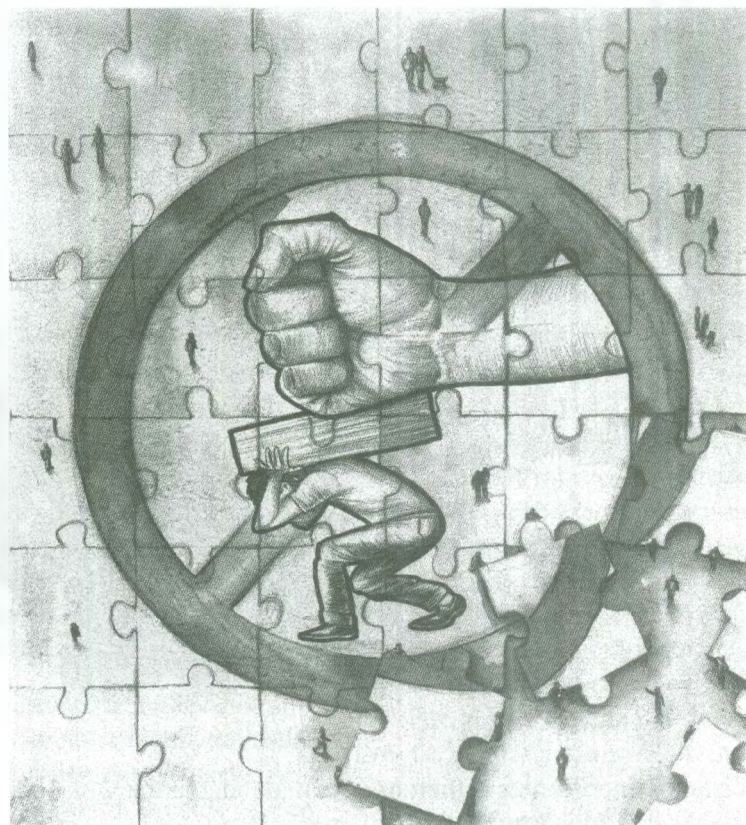
6. Es esta, precisamente, la tesis central del valioso texto de N. Tenzer, en Op. cit.

7. Tomamos el concepto de “hegemonía política y cultural” —ampliamente desarrollado por Gramsci— como mecanismo de construcción de consensus en la sociedad. Esto, en oposición al de dominación o simple dictadura de clases. Véase: BUCI-GLUCKSMANN, Christine. Gramsci y el Estado. Cuarta edición en español, siglo XXI Editores, México, 1979. Pág.182-186.

8. Es esa, la idea que presenta, por ejemplo, SÁNCHEZ D., Rubén. Op. cit., así como los diversos artículos contenidos en, DELGADO, Oscar, et. al. Modernidad Democracia y Partidos políticos. Fescol-Fidec, Santafé de Bogotá, Primera edición, marzo de 1993.

necesidad de construir organizaciones que mediaran la relación entre el Estado y la sociedad. Aun cuando, como afirma Sartori, los partidos, desde hace ciento cincuenta años han actuado y se han desarrollado mucho más como cuestión práctica que teórica. La crisis de representación política que padecen sociedades como la colombiana, está ligada a la dramática situación por la que atraviesan los partidos políticos, interna y externamente considerados. Algunos analistas coinciden en señalar que los partidos en Colombia, más que representantes de la sociedad ante el Estado, lo que históricamente se hace es “formular proyectos pensando más el Estado que en la sociedad⁹. Para el historiador F. González, los partidos tradicionales contribuyeron a la articulación de las regiones al Estado, desde arriba, en tanto que coaliciones de élites locales y regionales, apelando a las descripciones clientelistas o voluntarias. “Los partidos se transforman en una especie de dos subculturas contrapuestas”¹⁰.

En la política latinoamericana y colombiana, se constatan coincidencias frente a la crisis de los partidos políticos, cuyas expresiones internas son la profunda atomización, una constelación de grupos cohesionados con base en intereses prebendarios, clientelares y/o carismáticos, más que por razones ideológicas o políticas¹¹. Son fracciones que exacerban sus contradicciones hasta límites irreconciliables, como se reflejó por ejemplo en el partido liberal en Antioquia¹². En lo externo, está *in crescendo* la pérdida de legitimidad de los colectivos políticos, con diversas expresiones del desprestigio en que han caído. Indudablemente que en ello inciden factores



como la pérdida de fronteras ideológicas y programáticas entre estos, aparejado a su resquebrajamiento orgánico. Hechos que son fácilmente constatables en los resultados electorales. Si a este faccionalismo le sumamos el alto nivel de movilidad de las coaliciones, nos enfrentamos

a un abigarrado y “confuso” cuadro de la política colombiana¹³.

Diversas formas se han ensayado para recuperar credibilidad y apoyo de la ciudadanía, siendo hasta ahora, vanas todas estas iniciativas. Después de la Constitución de 1991 se vienen

9. VARGAS V. Alejo. Participación social, planeación y desarrollo regional. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho. Ciencias Políticas y sociales. Santafé de Bogotá, 1994. Pág. 66.

10. GONZÁLEZ, Fernán. Aproximación a la configuración política de Colombia. En: Un País en construcción. Vol. II, varios autores. Controversia N° 153-154. Cinep, Bogotá, Octubre de 1989.

11. Existen diversos análisis, apoyados en trabajos de campo, sobre el tema, tal vez el más destacado es LEAL B., F. y DAVILA L., Andrés. El clientelismo. El sistema político y su expresión regional. Segunda edición, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, 1991. Así mismo, en DELGADO, Oscar. et al. Op. cit.

12. La fracción liberal liderada por Bernardo Guerra Serna, se opuso virulentamente a apoyar la candidatura a la gobernación (95-97) del mandatario departamental Álvaro Uribe Vélez, igual sucedió con las elecciones presidenciales del año 2002. Fenómenos como éste se presentaron recurrentemente en las últimas décadas, en el liberalismo y también en el partido Conservador, en diversas regiones del país, y en las coaliciones de carácter nacional.

13. Sobre las características del sistema de partidos en Colombia y las crisis del bipartidismo véase, en DELGADO, Oscar Op. cit., especialmente el artículo de Pierre Gilhodes Sistema de partidos y partidos políticos en Colombia. Pág. 69-112.



realizando importantes esfuerzos desde el Estado por avanzar en una modernización de la sociedad en todos los campos. Aunque realmente, ésta se ha centrado más en el orden jurídico, siendo muy distante aún de la realidad social y política y, bajo la administración Uribe Vélez se arrecian los vientos revocatorios de los aspectos progresivos de la carta política.

Hay quienes consideran que las tradicionales colectividades políticas colombianas no son propiamente partidos, como afirma Guilhodes *"ni el liberalismo ni el conservatismo como tal, son partidos en el sentido moderno de la palabra. En la cultura política colombiana expresada por una larga tradición bipartidista, son ante todo, subculturas diferenciadas pero complementarias"*¹⁴.

En Colombia, la crisis de los partidos es anterior a los noventas,

aunque adquiere singular peso en este período posconstitucional, con las posibilidades que jurídicamente se han abierto, manifestándose claramente en fenómenos como la "volatilidad electoral"¹⁵. Pero, esto se debe no sólo a las reformas institucionales, encontramos también raíces en los cambios gestados en las décadas precedentes, particularmente desde los años 70, al interior del modelo económico social que hoy se expande en el mundo y cuyos rasgos básicos están constituidos por: asignación de nuevos roles del Estado, fragmentación de los agentes sociales, y el resurgir político de la "sociedad civil".

En este contexto, la profundización de la crisis se vuelve irreversible, pues ya no depende de los simples deseos de unidad de sus facciones, ni de que el Estado se dote de instrumentos de modernización e institucionalización de dichos partidos. Como lo analiza para Europa Kaase: *"la ideología y la*

adhesión a los partidos han perdido parte de su fuerza aglutinadora (es decir, su peso en la configuración en los sistemas de creencias) y los ciudadanos pertenecen cada vez a más y más redes personales. Así, las alineaciones según temas reivindicativos dejan de corresponderse con las simpatías por los partidos, y la importancia y duración de una temática concreta determinan hasta que punto vale la pena dejar de lado los partidos y los grupos de interés del sistema a fin de lograr que se aborde el problema y se obtengan resultados sin demora.[...] Se han abierto nuevos cauces de interven-

14. Op. cit.. Pág. 83.

15. Término utilizado por algunos para referirse a la libertad con que los ciudadanos escogen o cambian de preferencia política electoral en las distintas elecciones, lo cual indica una fuerte modificación en las prácticas políticas electorales, particularmente en la tradición de "votos cautivos". Véase GUTIÉRREZ S. Francisco. Op. cit.. Pág. 75-2, 77 y 82.

ción política con la 'revolución participativa'. La participación a través de los movimientos sociales es uno de estos cauces" ¹⁶.

El desprestigio en que han caído las agrupaciones políticas y el consiguiente rechazo o por lo menos poco entusiasmo generado en las masas, son empíricamente constatables en los registros electorales de los últimos años en Colombia¹⁷. Desplazamientos de franjas de electores entre los distintos partidos y especialmente el auge que parecen mostrar la emergencia de movimientos y candidatos ajenos a los partidos tradicionales, como se vio en las elecciones del 2003 en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Nuevos escenarios y nuevos actores políticos

En las dos últimas décadas asistimos a grandes transformaciones en las sociedades, con motivaciones diferentes, pero con fuertes conexiones entre sí: Cambio de las condiciones económico-sociales existentes; reconversión del quehacer político y considerables mutaciones en muchas de las prácticas culturales de los pueblos, lo cual conforma el nuevo teatro dentro del cual irrumpen a la escena, una variada gama de nuevos movimientos sociales y políticos, representando papeles antes vedados a la política.

Desde la década de los años setentas, en Latinoamérica y en particular en Colombia, se asiste a un acelerado proceso de urbanización, un significativo cambio en los índices de crecimiento poblacional de las ciudades que ha traído aparejado un sinnúmero de situaciones y problemas y con ellos de movimientos sociales nue-

vos, que asumen diferentes nombres en las regiones, y que ha llevado a muchos analistas a ocuparse de ellos, registrando a "los movimientos cívicos como una nueva forma de la lucha popular en Colombia", pues *"A nivel municipal la crisis urbana se manifiesta en fiscos quebrados, en la paralización de los servicios públicos, en el deterioro del ambiente, en el fracaso de los planes de urbanismo, en la crisis de la gestión municipal, en las fricciones con el poder central, y en la pérdida de consenso de las administraciones municipales. Es en este contexto en el que irrumpen los movimientos sociales urbanos, entre los cuales, el movimiento cívico en Colombia, es su forma más importante"* ¹⁸.

La urbanización ha conllevado cambios importantes en las mentalidades de las masas populares y particularmente en sus prácticas políticas. Los partidos (de derecha e izquierda) han resultado insuficientes para atender las demandas de estos sectores sociales que han venido pasando de luchar por reivindicaciones meramente sociales y sectoriales a incursionar en la arena política. Son problemas específicos o intereses muy sectoriales los que desatan la dinámica de estos movimientos, articulados a causas de los sectores marginados de la población, grupos de interés o diferentes opciones de vida.

En otra cara del nuevo escenario, mientras el Estado privatiza la mayoría de sus tradicionales funciones públicas, muchas de las actividades privadas, hasta hace poco consideradas excluidas de la política, se hacen públicas y sus agentes, desde la sociedad civil irrumpen en la vida política. Esto ocurre en momentos en donde los partidos han dejado de ser los instrumentos más idóneos y eficaces para representar a la sociedad en la lucha política, siendo necesario que los propios actores sociales asuman roles políticos y que los actores políticos en su afán de relegitimarse acudan a actuar decididamente en apoyo de las luchas sociales. En sociedades como la nuestra, vienen adquiriendo singular importancia otros nuevos movimientos: Por la paz y contra la guerra, Pro-derechos humanos, las redes juveniles, el de mujeres, movimientos urbanos armados ("milicias" y "paras"), el ecológico y diversas corrientes cristianas¹⁹.

Algunas de las características de estos nuevos movimientos son el rechazo al autoritarismo y a las formas orgánicas verticales y relativamente rígidas, propias de los partidos (de derecha e izquierda). Muchos de estos asumen la forma de "redes de redes", cuyos nexos de relacionamiento son bastante flexibles, pudiendo convivir en un pluralismo

16. KAASE, Max. Movimientos sociales e innovación política. En: Los nuevos movimientos sociales un reto al orden político. Edicions Alfons el Magnànim. Valencia, 1992. Pág.138-139.

17. Las estadísticas electorales del 1994, 98 y 2002, son muy dicentes al respecto. Véase también: GUTIERREZ S., Francisco. Tendencias de cambio en el sistema de partidos: el caso de Bogotá. Análisis Político N° 24, enero-abril de 1995. IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Pág.73-82.

18. SANTANA R., Pedro. Los Movimientos sociales en Colombia. Foro Nacional por Colombia, Bogotá, mayo de 1989, Págs. 173-197. Además, existe abundante literatura en Latinoamérica sobre el tema. En Colombia, véase, por ejemplo: RESTREPO, Luis A; FALS B., Orlando; CAMARGO, Santiago y GIRALDO, Javier. GARCIA, Clara Inés.

19. Varios analistas se vienen ocupando del tema. Por ejemplo, RESTREPO, Luis Alberto, en la revista Análisis político, URAN, Omar (IPC); Jaramillo, Ana María y otros (Corporación Región).

que afirma la diferencia como complementaria, *unidad en la diversidad*, que potencia y desarrolla aún más las múltiples energías y experiencias distintas que allí participan. No se trata entonces de que las viejas formas organizativas y prácticas autoritarias hayan sido superadas ya, pues estas siguen haciendo presencia de múltiples maneras, pero cuando aparecen rápidamente quedan al descubierto y ya no se imponen tan fácilmente como antes. Planteaban intereses incompatibles con el orden social y político existente, acudiendo por lo general a mecanismos de coerción o fuerza, por vías extra-institucionales. Hoy vemos algunos cambios, debido al desplazamiento que viene tomando la política hacia la sociedad, al reconocimiento que estos movimientos han logrado, en términos de legitimidad e incluso de legalidad, como en Colombia, después de la Constitución del 91, en donde se han abierto múltiples formas de participación política y electoral, y desde allí, despliegan su actividad social, a veces muy sectorialmente, encuentran la necesidad de expresarse políticamente y acceden a organismos del Estado para potenciar mejor sus banderas.

Los nuevos movimientos promueven críticas a las estructuras jerárquicas y las burocracias anquilosadas e inamovibles de los partidos, desarrollando, en contrapartida, formas menos autoritarias, con prácticas más democráticas y autónomas, hacen valer sistemas menos aparataistas, organizaciones más laxas y muchas veces provisionales, las cuales tienen las grandes limitaciones, inherentes a su propio carácter. Son fuerzas de vanguardia, cuantitativamente aún minoritarias pero con poder movilizador impredecible.

Constituyen la verdadera esperanza de nuestros pueblos. Uno de los movimientos más persistentes de las nuevas formas de organización y acción, además de los cívicos, son las numerosas redes de organizaciones de mujeres existentes en diversos países del Norte y del Sur, situación de la cual Colombia también es testigo, y a las que se ha sumado ahora, los luchadores por el respeto a su orientación sexual.

Epílogo. La política y la organización en el siglo XXI

Estos cambios en las prácticas políticas y en las formas organizativas no están concluidos. Son situaciones nuevas que van en ascenso y conviven con viejas formas que si bien se resisten de múltiples maneras a ser desplazadas, sin embargo, cada vez son más asumidas sobre todo entre los sectores más jóvenes de la población y aquellos que han tenido mayores posibilidades de educación y/o conocimiento de esas nuevas prácticas democráticas.

En la medida en que los partidos den un decidido apoyo a las causas de estos movimientos y que estos a su vez necesiten para su desarrollo del concurso de los partidos seguirá siendo necesaria la existencia de los partidos. Pero, con una salvedad, y es que, si estos siguen existiendo, su forma de relacionamiento con los movimientos y con las masas de electores ya no será como antes. Así sigan existiendo colectividades políticas con la denominación de partidos, sin embargo, éstas, no podrán seguir actuando como antes, pues las condiciones de hoy les han impuesto un nuevo rol, y los nuevos actores políticos no van a ser simples sustitutos de los anteriores partidos. Ha entra-

do a la escena una nueva forma de representación política, ahora protagonizada por colectivos que son relativamente inestables, provisionales, unidos frente a problemas específicos en coyunturas muy concretas. Porque también el escenario de la política sufre serias mutaciones, haciéndose más amplio, saliéndose del monopolio del Estado para llegar a nuevas esferas de la sociedad.

Otro rasgo importante en los movimientos sociales es el tipo de ideología que comparten. Ya que si bien tienen en común algunas creencias que los unen, sin embargo, no siguen ningún grandioso plan con miras a una sociedad mejor, ni profesan ninguna concepción marxista o algo parecido, ya que su visión de la sociedad futura se define sobre todo en términos negativos "*Saben lo que no quieren, pero son inseguros e incoherentes respecto a lo que quieren en sus concreciones prácticas*"²⁰. Son palpables los entrelazamientos que se dan entre los diferentes movimientos y sus niveles organizativos horizontales. Participan de varios de estos movimientos a la vez, porque sus temáticas comprenden causas comunes, en ningún momento excluyentes, como los movimientos de mujeres, jóvenes, ecológicos y en los de opciones de vida (religiosos).

El movimiento de mujeres, con importantes diferencias entre el Norte y el Sur, aquí en el Sur, sus reivindicaciones están además cruzadas por las grandes privaciones económicas y los conflictos originados en las condiciones de dependencia y empobrecimiento. Sin embargo, hay ámbitos comunes que se expresan no sólo bajo la forma de "nuevo movimiento social", sino que han replan-

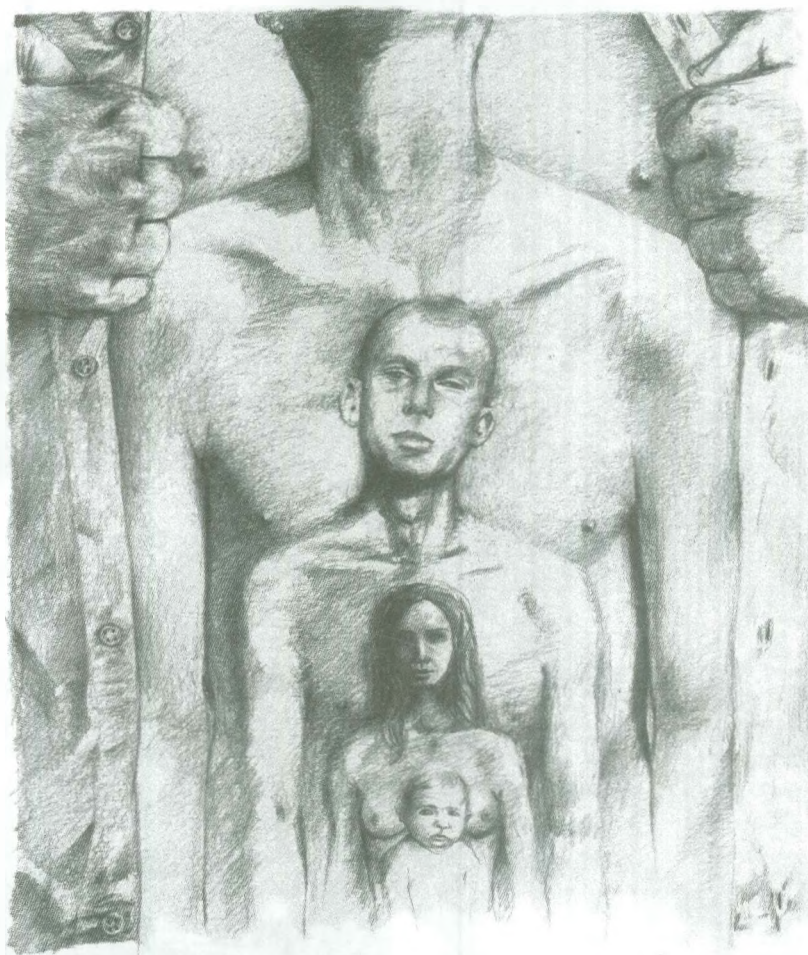
20. Op. cit. Pág. 378.

teado la existencia de espacios hasta hace poco considerados como privados y por tanto ajenos a la política.

En otros ámbitos, nos recuerda E. Morin *"La política está en todas partes, pero no todo es política (...) antes existía un habeas corpus que limitaba los derechos de la policía a fin de salvaguardar la vida privada. Hoy la situación se ha agravado porque, con la aparición de los microdireccionales, con los nuevos procedimientos de escucha, de filmación de videos, cualquiera puede controlar a la totalidad de los individuos"*²¹.

Los actores colectivos que hoy ejercen la política son cambiantes e inestables, así como la mayoría de sus formas organizativas, lográndose identificar en el escenario político más por sus acciones que por sus estructuras orgánicas, y más por sus luchas concretas que por sus posibles definiciones programáticas. Coherente con esas prácticas, el tipo de alianzas que establecen reúnen las mismas características: ya no es dable la pre-determinación de aliados estratégicos, en tanto son las cambiantes condiciones las que van re-agrupando, re-encontrando y re-definiendo los sujetos que, participando sin libreto previo, improvisan escenas y arman fugaces representaciones públicas, involucrando en ellas al mismo público, de modo tal que este resulta igualmente convertido en actor, en un escenario completamente móvil y transformable.

Dudamos que los partidos desaparezcan definitivamente. Sin embargo, estos al igual que los sindicatos, han perdido el protagonismo como mediadores —"por antonomasia"— de la política, de modo tal que su sobrevivencia y su futuro se hace



más incierto, en tanto han surgido competidores con mayor legitimidad y con mejores capacidades para adaptarse a los cambios que presenta la nueva situación.

Los movimientos alternativos tampoco son la panacea de los nuevos tiempos, pues contienen grandes debilidades y limitaciones, en tanto son productos de la situación de fragmentación temática, atomización orgánica y pragmatismo ideológico, que son los insumos ofrecidos por la realidad contemporánea y que también penetra estas nuevas prácticas. Superar esas limitaciones es una imperiosa necesidad para las clases

y sectores subalternos, para lo cual son insuficientes las articulaciones entre las diferentes fuerzas alternativas de cada nación, requiriéndose alianzas supra-nacionales, con un carácter más estable y duradero.

Por ahí puede estar la clave del advenimiento de procesos democráticos más integrales, y por tanto condiciones más favorables para una mejor calidad de vida de los hasta ahora excluidos de las ventajas que ofrece el vivir en sociedad.

21. MORIN, Edgar. Fronteras de lo político. Revista de Occidente N° 168, mayo de 1995. Págs. 5-18.



Esta nueva generación de alcaldes y gobernadores independientes y de izquierda democrática no sólo tienen la oportunidad sino el reto y el deber de quebrantar ese modelo tradicional del ejercicio de la política y reemplazarlo por otro tipo de conductas acordes con un proyecto de democracia participativa y de gestión pública al servicio de los intereses del conjunto de la población.

NUEVAS FUERZAS POLÍTICAS EN EL ESCENARIO TERRITORIAL:

EL RETO DE INNOVAR

Fabio Enrique Velásquez Carrillo

Profesor de la Universidad del Valle,
Investigador de Foro Nacional por Colombia

Descentralización y nuevos actores políticos

Uno de los resultados más relevantes de la descentralización ha sido la configuración de un nuevo mapa político en el país. Hasta finales de la década del ochenta la política colombiana giraba en torno a temas, coyunturas, actores y debates de carácter nacional. Los partidos liberal y conservador dominaban la escena política e imponían sus criterios en el manejo de las políticas públicas. La política local no era más que un apéndice de la política nacional¹ y poca incidencia tenía en las grandes decisiones, tomadas generalmente a partir de acuerdos entre el ejecutivo y el legislativo nacional.

Esa situación comenzó a cambiar desde la primera elección de alcaldes en 1988². Aunque los partidos tradicionales siguen dominando cuanti-

tativamente las elecciones en los municipios y departamentos, dos fenómenos nuevos han transformado el panorama político nacional. El primer fenómeno, es que han aparecido en la escena local actores que no necesariamente tienen un vínculo con las grandes empresas electorales que son los partidos tradicionales: movimientos cívicos, propuestas “independientes”, alcaldes y gobernadores sin partido (outsiders), coaliciones, candidatos de diferentes grupos de izquierda, etc. Sin importar la denominación, estas propuestas, muchas de ellas efímeras pero

no por ello menos significativas, han congregado a actores locales interesados en convertirse en alternativas al bipartidismo, que construyen apuestas referidas a los problemas económicos, sociales y físico-espaciales del territorio, o a nuevas fuerzas nacionales que han ido cuajando en la escena política del país. En algunos casos existen vínculos por el origen con los partidos tradicionales, pero generalmente pretenden autonomía e identidad propias. No existe un inventario de tales movimientos, pero en cada una de las elecciones locales realizadas hasta

1. Uno de los reflejos de esa situación —no el único y probablemente no el más importante— es el hecho de que los grandes dirigentes nacionales y los caciques regionales de los partidos eran hasta mediados de la década del ochenta, a la vez, concejales de pequeños municipios, lo que les permitía arrastrar un importante caudal de votos para mantener el control político local y para alimentar sus redes electorales en el nivel nacional.

2. Pedro Santana ha publicado en la Revista Foro varios artículos intentando hacer una lectura de los resultados electorales en cada período. El más reciente es el artículo: El nuevo mapa político: el referendo y las elecciones regionales y municipales, publicado en la Revista Foro, N° 49 (Diciembre de 2003-Enero de 2004). Pág. 3 y siguientes. Otros autores como Pilar Gaitán y Patricia Pinzón han hecho ejercicios similares.

ahora han tenido presencia, en ocasiones relevantes desde el punto de vista de los resultados electorales. En las elecciones del 26 de octubre del 2003, por ejemplo, 23 de los 30 gobernadores elegidos pertenecen a las toldas de los partidos tradicionales, tanto oficialistas como fracciones “disidentes”. Los siete restantes son candidatos independientes, tres de ellos de izquierda (Valle, Nariño y Guanía) y cuatro que provienen de los partidos tradicionales o son fuerzas nuevas, no necesariamente de izquierda. En lo que respecta a las elecciones municipales, 74 partidos y movimientos lograron elegir candidatos propios, la mayor parte de ellos pertenecientes a fracciones de los partidos tradicionales. Los candidatos independientes de corte progresista y de izquierda alcanzaron cerca de medio centenar de alcaldías municipales.

Otro fenómeno, es el del avance lento, pero progresivo, de fuerzas progresistas y de izquierda que han ido copando, también de manera transitoria en muchos casos, las alcaldías y algunas gobernaciones, expresando una búsqueda de nuevos horizontes políticos por parte de un segmento del electorado (más en las ciudades que en las áreas rurales, más en grandes ciudades que en intermedias y pequeñas) descontento con el manejo bipartidista de la gestión pública y ávido de nuevas propuestas, de perfil democrático y más centradas en la solución de los grandes problemas sociales de municipios y regiones, incluida, por supuesto, la paz. En ese sentido, las elecciones del 26 de octubre de 2003 arrojaron resultados muy importantes: las alcaldías de tres de las cuatro grandes ciudades quedaron en manos de candidatos alternativos, así como las de algunas ciudades inter-

medias y municipios de menor tamaño. Igual cosa ocurrió con departamentos como el Valle y Nariño, en los que candidatos de izquierda ganaron con amplio margen. Se calcula que cerca de una tercera parte de la población colombiana vive en municipios y departamentos gobernados por dirigentes de izquierda e independientes. Es un resultado importante que hace un cuarto de siglo estaba por fuera de cualquier cálculo y que no sólo implica una responsabilidad histórica para las organizaciones que respaldaron esas candidaturas ganadoras, sino que abre una nueva página en la historia electoral del país.

La renovación de la política

Las propuestas de esta nueva generación de alcaldes y gobernadores independientes y de izquierda giran en torno a tres aspectos que, de concretarse, implicarían una importante transformación de las coordenadas de la política local, regional e, incluso, nacional. El primero de ellos, es la renovación del ejercicio de la política. Esta es una intención de tiempo atrás que, incluso, los dirigentes políticos tradicionales han planteado al electorado en reiteradas ocasiones, pero que no ha mostrado hasta ahora resultados tangibles. La cultura política colombiana moldeada a lo largo de nuestra historia republicana se ha movido —y sigue haciéndolo— en torno a tres rasgos centrales: el autoritarismo, el clientelismo y el caudillismo. No son los únicos —la corrupción, por ejemplo, ha sido nota relevante de la gestión pública en el país, especialmente desde fines de la década del cincuenta del siglo pasado cuando se puso en marcha el pacto bipartidista del Frente Nacional— pero sí los pilares

de las conductas políticas de la mayoría de los colombianos.

El autoritarismo como característica secular del régimen político colombiano ha asumido formas muy diversas: la represión directa del movimiento popular y de las expresiones sociales y políticas por fuera —y, en ocasiones, en contra— del establecimiento—; el diseño y la implantación de políticas públicas que no consultan los intereses de los diversos sectores de la población, sino la voluntad —y el capricho— de los grupos de poder económico y político; en fin, la concentración de decisiones en el ejecutivo y, más precisamente, en el presidente de la república, reservando un lugar secundario a las restantes ramas del poder público y restando incidencia a otros actores del aparato estatal (alcaldes y gobernadores)³. El talante autoritario no es sólo de los gobernantes y de quienes ejercen el poder político desde el aparato estatal, sino también de la población, que lo ha interiorizado hasta convertirlo en norma de vida. El apoyo popular al llamado del presidente Uribe a restaurar sin concesiones la autoridad del Estado y a no ceder ante las presiones de los grupos insurgentes en la perspectiva de una solución negociada al conflicto es una muestra de ese sentimiento que, como resultado de anteriores fracasos y de una percep-

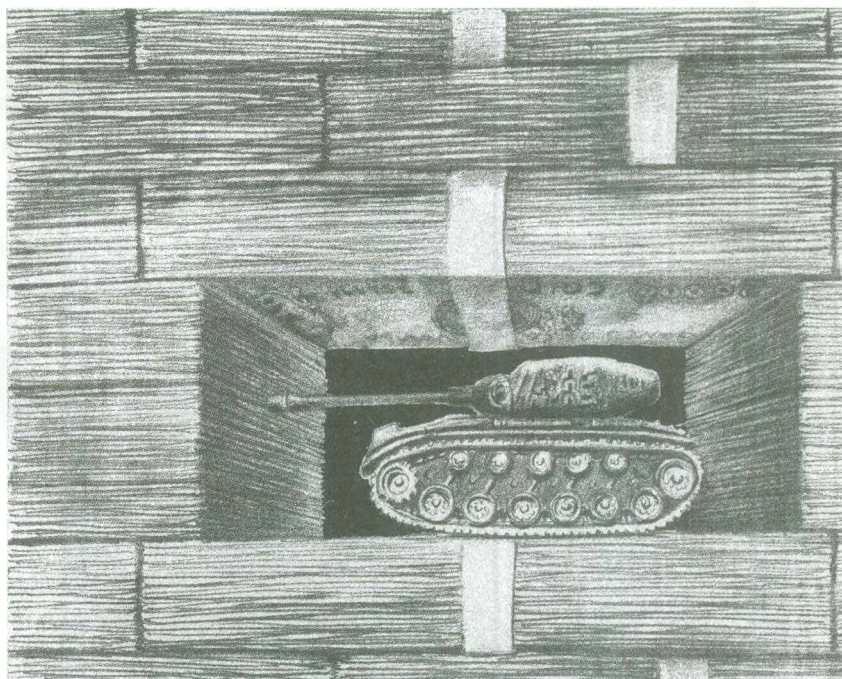
3. El Presidente Uribe, siendo candidato, insistió hasta el cansancio en la necesidad de recuperar la autoridad como paso inicial para garantizar la tranquilidad ciudadana y combatir a los alzados en armas. Como presidente ha sido fiel a su promesa imponiendo su talante autoritario, acaparando decisiones y alejando al país de cualquier salida política al conflicto armado. Es una muestra, un paradigma de gobierno autoritario.

ción de caos, se impone en la mentalidad de los colombianos de todas las clases.

El clientelismo ha sido probablemente la impronta más visible del sistema político colombiano y uno de sus principales elementos estructurantes, como lo han señalado un sinnúmero de autores⁴. Logró implantarse en la mente y en las conductas de los gobernantes y del pueblo colombiano, especialmente en los segmentos más pobres de la población, gracias a algunos de sus rasgos más importantes: en primer lugar, su capacidad de incorporación de sectores excluidos al sistema político. Se trata de una incorporación parcial por la vía de las prebendas y no tanto del acceso a la órbita de las decisiones públicas. El clientelismo permite a sus beneficiarios obtener bienes y servicios públicos y privados, a condición de que permanezcan en una situación de subordinación con respecto al intermediario político.

Otro aspecto, es que el clientelismo ha sido eficaz desde el punto de vista de la solución, generalmente parcial, a problemas sentidos por los sectores más necesitados de la ayuda estatal. No toca las raíces de los problemas de la población, pero logra aliviar situaciones de precariedad que afectan a sus beneficiarios. Finalmente, el clientelismo es oportuno en tanto responde con cierta agilidad a las demandas de la población, sin esperar largos trámites burocráticos o procesos de planificación que llevan tiempo y no necesariamente consultan las necesidades de estos sectores.

El clientelismo establece por definición una relación de dependencia entre la clientela y el intermediario político. Éste se convierte en puente



entre aquella y el Estado y, más aún, en casi que un requisito ineludible para obtener los beneficios del gasto público. El papel dominante del intermediario se traduce en una especie de culto a la persona que refuerza las actitudes y las conductas caudillistas de la dirigencia política. No es ésta la única fuente del manejo personalista de la política en Colombia. Este último tiene que ver también con una cultura heredada de viejas instituciones españolas como la hacienda y la encomienda, o con el talante de los fundadores de la República, la mayor parte de ellos militares que lideraron las batallas de independencia contra la Corona española y que fueron tenidos siempre como protagonistas de gestas heroicas en los campos de batalla. Hoy día el caudillismo se ha consolidado, especialmente a raíz del fraccionamiento de los partidos en los últimos quince años y como consecuencia de nuevas corrientes de pensamiento que dan mayor

importancia a las personas y a su imagen mediática que a las instituciones y a las ideas en el funcionamiento de los regímenes democráticos. El talante del Presidente Uribe, similar al de Chávez en Venezuela o Fujimori en el Perú, es un claro ejemplo de esta tendencia mesiánica que se ha instalado en el corazón de la política colombiana, abonando el terreno para la consolidación del autoritarismo y el debilitamiento de la institucionalidad democrática.

El tercer aspecto, los alcaldes y gobernadores independientes y de izquierda democrática no sólo tienen la oportunidad sino el reto y el deber de quebrantar ese modelo de ejercicio de la política y reemplazarlo por otro tipo de conductas acordes con un proyecto de democracia participativa y de gestión pública al servicio de los intereses del conjunto de la población. El autoritarismo debe dar

4. Ver los trabajos de Francisco Leal, Andrés Dávila, Eduardo Díaz y Rocío Rubio.



paso a una gestión abierta a la voz ciudadana y comprometida con el diálogo permanente en los procesos de construcción de política pública. El clientelismo debe ser totalmente erradicado como forma de relación política con la ciudadanía y de asignación del gasto público. La planeación participativa, la racionalidad en la asignación del gasto público, la definición de prioridades inspiradas en criterios de inclusión, equidad y justicia social, la erradicación de toda práctica de transacción en la definición de políticas y programas

públicos han de ser los criterios que inspiren su comportamiento en el manejo de sus responsabilidades públicas. Finalmente, la defensa de la institucionalidad democrática, de las ideas y de los programas debe estar por encima del culto a las personas en la estructuración de las apuestas políticas de la izquierda. Se necesita, por supuesto, que los alcaldes y gobernadores ejerzan un liderazgo sin titubeos y sepan conducir los destinos de su territorio. Pero ello no puede hacerse desde una óptica mesiánica, como la que practica

actualmente el presidente de la república, sino de un liderazgo democrático que fortalezca las instituciones y que abra campo a la construcción colectiva de las acciones de gobierno.

Los dirigentes de izquierda no están exentos de la tentación de acomodarse a los viejos esquemas políticos. Más aún, existen conductas, a veces encubiertas, a veces más explícitas, que lindan con el autoritarismo, con el clientelismo y, sobre todo, con la vanidad de quienes se han destacado en el ejercicio del liderazgo en ámbitos muy diferentes como el sindicalismo, la docencia universitaria, el trabajo comunitario o los negocios. La izquierda deberá hacer un esfuerzo de transformación cultural y de reafirmación de nuevas formas de actuación política si quiere innovar, como es su deber. De lo contrario, perderá su perfil y terminará diluida en los contornos de la vieja política.

La apuesta por la gente

Una apuesta de las autoridades de izquierda e independientes es la priorización de la política y de la inversión social durante su mandato.

Conscientes de que existe una creciente deuda social, expresada en los altos índices de pobreza y de exclusión vigentes en Colombia (67% de la población del país se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras 12 millones de colombianos son catalogados por estudios recientes como indigentes), y de que las políticas públicas poco han hecho por subsanar esa situación, tanto en el nivel nacional como en el territorial, los alcaldes y gobernadores de izquierda e independientes han reafirmado su decisión de invertir el orden de prioridades en el gasto público y enfrentar sin vacilaciones la situación social que viven sus ciudades y departamentos.

Esta postura constituye por sí misma un elemento innovador, en la medida en que tradicionalmente los alcaldes y gobernadores prefieren las obras de infraestructura y de desarrollo urbanístico, algunas de ellas faraónicas, como componente principal de su gestión, pues creen que dejando ese legado visible —una autopista, un polideportivo, un parque, un sistema de transporte, etc.— podrán ser recordados por mucho tiempo y pasar a la historia como “paladines” del progreso de sus comarcas. Nadie niega la importancia que pueden tener esos proyectos como componentes de la calidad de vida de la gente. Más aún, deberán hacer parte de las propuestas de inversión de los nuevos alcaldes y gobernadores. Sin embargo, no pueden convertirse en su principal preocupación. Se trata de invertir prioridades y comenzar a pensar qué hacer con los niños y niñas, con los jóvenes y adultos que pasan hambre, que no tienen techo o recursos para garantizar una dieta alimentaria básica; qué hacer con los habitantes de la

calle, con los grupos excluidos de los beneficios del progreso económico; con las víctimas de la violencia privada y pública, social y política; en fin, cómo imprimir en la gente una cultura ciudadana que promueva la responsabilidad pública y la cooperación de todos y todas para hacer de nuestras ciudades y departamentos territorios de progreso, convivencia e igualdad social.

Esta apuesta, que implica, entre otras cosas, asistencia a los pobres, políticas de generación de ingresos, mejoramiento de los equipamientos comunitarios, acceso a los servicios públicos, fortalecimiento del tejido social, programas de calidad en la educación y la salud, programas de seguridad alimentaria, iniciativas para fortalecer la cultura política democrática, seguramente encontrará en el camino obstáculos de gran monta: en primer lugar, financieros. La mayor parte de las ciudades y departamentos poseen finanzas precarias, lo que obligará a sus autoridades a desplegar una gran dosis de imaginación para encontrar por la vía de la austeridad, de la gestión nacional e internacional, de la racionalidad del gasto, los recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas. Ciudades como Bogotá y, en parte Medellín, no viven ese drama, pero tampoco tienen un futuro claro en materia financiera. Los índices de pobreza en Bogotá, por ejemplo, no sólo muestran un deterioro de la economía local, sino que constituyen un factor de reducción del aporte tributario de sus habitantes, lo que podría en el mediano plazo tener repercusiones negativas en la puesta en marcha de programas sociales. Es la paradoja de la pobreza que exige mayor intervención del Estado, al tiempo que esta interven-

ción se ve debilitada por la misma pobreza.

Pero no es éste el único obstáculo. La propuesta de dedicar los mayores recursos a la reducción de las desigualdades sociales choca con el carácter abiertamente neoliberal de las políticas del gobierno nacional, tanto macroeconómicas como sociales (focalización, subsidios directos a la demanda, capitación, autogestión comunitaria para la atención de necesidades, etc.). Dichas políticas no sólo parten de lecturas completamente opuestas sobre la realidad social y el papel del Estado, sino que producen, como lo muestra la experiencia latinoamericana durante la década del noventa, mayores desigualdades y una concentración del capital y del ingreso. De igual forma, los alcaldes y gobernadores tendrán que enfrentar el embate de un gobierno central codicioso, autoritario y centralista que quiere debilitar progresivamente las finanzas territoriales y acaparar los recursos para financiar el déficit nacional y alimentar las arcas para la guerra. En ese sentido, no sólo existe la intención de reducir la capacidad de gasto de los entes territoriales, sino que el gobierno nacional dejará de ser interlocutor de los alcaldes y los gobernadores para la ejecución conjunta de programas para atender las necesidades de la población. Lo que puede ocurrir en ese contexto es un aumento de las tensiones entre el gobierno nacional y los alcaldes independientes que dificultará significativamente la gestión de estos últimos.

Se requiere, en consecuencia, habilidad política, voluntad de cambio y unión de fuerzas para contrarrestar las políticas nacionales que van en

detrimento de los objetivos sociales que se han propuesto conseguir las nuevas fuerzas políticas y mostrar al término de su mandato logros concretos en este campo.

Gestión participativa

Otro componente de la propuesta de estos alcaldes y gobernadores es la apertura a la participación ciudadana, tratando de superar cualitativamente los niveles logrados hasta ahora en esa materia. Colombia posee una amplia y compleja infraestructura institucional y normativa para la participación ciudadana en la gestión municipal y departamental. Un estudio reciente⁵ muestra que, si bien se han dado importantes pasos en la utilización de dicha infraestructura, y se han obtenido logros relevantes como la movilización ciudadana en torno a lo público, la mayor incidencia de la población en las decisiones que le conciernen y el fortalecimiento de organizaciones sociales para incidir en los programas de desarrollo local y regional, falta aún un largo trecho por recorrer. En particular, los procesos de participación muestran algunas fracturas que han limitado su alcance y reducido su efectividad: en primer lugar, existe una visible desarticulación entre los distintos espacios de participación, lo que ha terminado por fragmentar la acción social y alejar a ciertos sectores de la población de los asuntos públicos. En segundo lugar, no ha sido fácil para los propios agentes participativos establecer una relación armónica entre intereses individuales e intereses colectivos. Para muchas personas, la participación tiene el exclusivo sentido de resolver problemas personales, familiares o de pequeños grupos, sin que haya una

preocupación por contribuir a la solución de los problemas del barrio, la vereda o la ciudad. Que la gente acuda a los espacios participativos para tramitar inquietudes que le afectan es perfectamente legítimo. El problema surge cuando esa motivación no se armoniza con propósitos de cooperación colectiva.

Finalmente, hay que señalar las tensiones entre actores sociales y actores políticos, entre representación política y participación ciudadana, en los procesos de acción colectiva. Los escenarios de participación se han convertido en arenas de competencia entre fuerzas sociales y políticas por pequeños micropoderes (económicos, sociales y políticos) que terminan por pervertir el sentido democrático de la participación y por fragmentar aún más la iniciativa ciudadana.

Si los alcaldes y gobernadores independientes y de izquierda quieren dar un salto cualitativo en su empeño democratizador, tienen que enfrentar esos problemas y resolver esas fracturas. Tendrán que diseñar políticas de participación que indiquen a las claras qué se quiere de ella, qué alcance pretenden darle y cómo van a armonizar lo que hoy está disperso. Tendrán además que manejar un enfoque sistémico que permita tender puentes entre los diversos escenarios participativos y entre sus agentes. En fin, deberán definir, en esa perspectiva sistémica, cuál ha de ser el elemento articulador, por ejemplo, la planeación participativa, que armonice lo que en la norma aparece desordenado y, por momentos, caótico.

También deberán generar a través de muy distintos medios una conciencia en la ciudadanía sobre la

importancia de que cada quien ponga su granito de arena en la construcción de ciudad y de territorio, de manera que, a la vez que se atienden las necesidades particulares, sea también posible pensar en los intereses de todos y todas. Este es un trabajo de largo aliento, por tratarse de la propia cultura política, que por esa misma razón debe iniciarse desde ya.

Finalmente, tendrán que hacer un gran esfuerzo por dignificar la política y lograr que la participación ciudadana se convierta en un instrumento para consolidar, y no para debilitar, las instituciones de representación política. Deberán incentivar la discusión pública sobre la participación y estimular entre los partidos una reflexión que hasta el momento es muy débil o no existe sobre la materia.

Otra Colombia es posible

La llegada de los independientes y de la izquierda democrática a las alcaldías de varias ciudades, entre ellas Bogotá y Medellín, tiene un hondo significado político pues a través de ellos se expresa una voluntad ciudadana que entiende que los municipios y los departamentos son escenarios relevantes y, en algunos casos, determinantes para la reivindicación de sus derechos y para la realización de sus expectativas individuales y colectivas. Es, en otras palabras, una voz que reivindica la autonomía de los entes territoriales en contra de la apuesta centralista del gobierno nacional. Expresa la voz de una proporción importante de los

5. VELÁSQUEZ, Fabio y GONZÁLEZ, Esperanza, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá: Fundación Corona, 2003.



colombianos y las colombianas que le dicen no a la actual política del gobierno nacional de debilitar la descentralización y de re-centralizar decisiones y recursos. Si en los últimos años el gobierno nacional ganó batallas importantes en contra de las autoridades territoriales, las elecciones de octubre pasado puso de presente que acabar con la descentralización no va a ser tan fácil y que existen alternativas políticas en los municipios y en los departamentos que quieren un país distinto al que propone Uribe con su estrategia de seguridad democrática. Habrá que ver los resultados de la gestión de estos mandatarios alter-

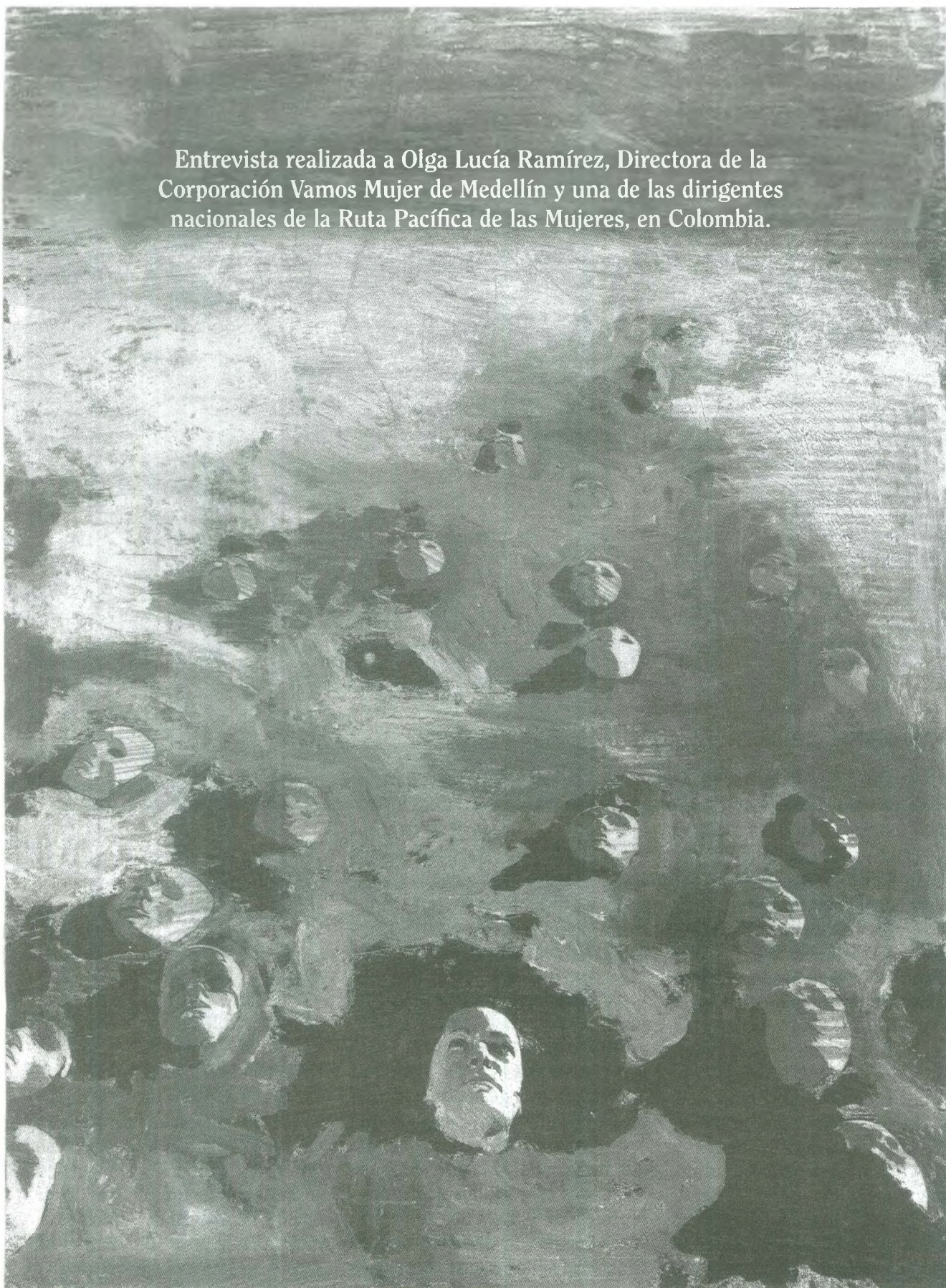
nativos. Pero su elección es ya un síntoma de que la monarquía uribista no logrará imponerse tan alegremente como lo pensaron los áulicos del actual presidente.

Pero, más allá de ese significado, el reto que tienen esos mandatarios es muy grande. Lo que se pregunta la gente es qué será lo nuevo que harán estos alcaldes y gobernadores, que les asigne un perfil propio y que consiga el apoyo de la población. Lo que se ha señalado en las páginas anteriores es que ellos deben diferenciarse de la vieja política, apostarle en serio a la ejecución de políticas incluyentes y abrir las puertas

al diálogo con la ciudadanía, incorporando imaginación, creatividad, empeño y los recursos a su alcance. En otras palabras, innovar y construir nuevos perfiles de gestión pública.

La prueba de fuego son las elecciones de 2007. No podemos repetir experiencias anteriores en las que las apuestas independientes y de izquierda se convirtieron en flor de un día. Los nuevos mandatarios deben pensar estratégicamente y entender que sólo a través de un esfuerzo de mediano y largo alcance podremos demostrar que otra Colombia es posible. ●

Entrevista realizada a Olga Lucía Ramírez, Directora de la
Corporación Vamos Mujer de Medellín y una de las dirigentes
nacionales de la Ruta Pacífica de las Mujeres, en Colombia.



RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES COLOMBIANAS

NO PARIMOS NI FORJAMOS HIJOS E HIJAS PARA LA GUERRA

Max Yuri Gil Ramírez

Jefe Programa de Convivencia y Derechos Humanos Corporación Región

La Ruta Pacífica de las Mujeres es una iniciativa política y social que trabaja contra la guerra y por la construcción de una sociedad democrática en Colombia. Esta iniciativa ha representado en nuestra historia reciente una renovación de los discursos y las prácticas políticas de los movimientos sociales, al colocar en el escenario público debates como la reconceptualización de lo que es la política y su relación con la dimensión subjetiva de las personas, al tiempo que ha cuestionado las lógicas patriarcales que alimentan el ejercicio de la lucha por el poder y la confrontación armada en nuestro país. Así mismo, es tal vez la organización social que posee una mayor capacidad de convocatoria, tanto en cantidad como en diversidad de sectores sociales a su interior.

Este movimiento social se inscribe en un contexto político latinoamericano caracterizado por el desencanto luego del proceso de transición democrática de los años 80, y por la

frustración debida a que la consolidación de los “regímenes democráticos” en la casi totalidad de los países del área no se ha concretado en un mejoramiento significativo de las condiciones de reconocimiento e inclusión para millones de personas¹. Pero también, por el proceso de agrupación de movimientos sociales y partidos políticos alternativos alrededor del Foro Social Mundial², que bajo la concepción de que Otro Mundo es Posible, han desarrollado un creativo proceso de reflexión y construcción de nuevas propuestas de acción política que, al tiempo que cuestionan el orden actual, visibilizan y potencial el accionar de sectores sociales subalternos.

¿Cómo fue el encuentro entre feminismo y movimiento social de mujeres en Colombia?

Olga Lucía Ramírez: El movimiento social de mujeres ha tenido una historia importante en los últimos 25 años en Colombia por la recepción

de los ecos de un pensamiento feminista muy ligado a Mayo de 1968 en París, y al movimiento y a la intelectualidad que surge de allí. A su llegada a América Latina, vía las universidades principalmente, el movimiento social de mujeres se relaciona con la movilización social que generan las organizaciones de izquierda y con el mundo popular de las mujeres excluidas y empobrecidas. Cuando se comienzan a ver dentro de esa misma izquierda nuevas formas de exclusión hacia las mujeres y un aplazamiento de las reivindicaciones femeninas en un marco donde se privilegia una apuesta por la revolución, y donde las demás reivindicaciones sectoriales

1. Ejemplo de esta desafección con la democracia, es el resultado del estudio de la ONU, La democracia en América Latina, que señala que más de la mitad de las personas consultadas en América Latina prefieren que un gobierno les resuelva sus problemas básicos de subsistencia, así no sea formalmente democrático. El Tiempo, jueves 22 de abril de 2004.
2. www.forumsocialmundial.org.br/

específicas serán el premio después de llegar al poder, se genera en muchas mujeres un gran malestar, que se traduce en un encuentro muy fecundo, entre feministas universitarias y mujeres de sectores populares que no se sienten plenamente a gusto en esa construcción; y empiezan a pensar en el valor y la legitimidad de las reivindicaciones propias de las mujeres, que no queremos postergar para después nuestras preocupaciones cotidianas ni subsumirlas en otro proyecto supuestamente más "político".

Se lucha entonces por la resolución de necesidades prácticas, alrededor de las cuales las mujeres se organizan. Y al ir construyendo lo que llamamos el entre nosotras, las mujeres de los sectores populares han ido comprendiendo lo que los feminismos quieren poner de presente en la sociedad, es decir, tanto la lucha de carácter reivindicativo, como la importancia de la pregunta por la vida cotidiana y la intimidad de las mujeres, los desencuentros y sinsabores de la vida personal. Así se han articulado esos diferentes niveles, pobreza, exclusión, vida cotidiana, intimidad, o si se quiere dimensiones económica, política, social y cultural, y surge un feminismo muy original, particular en América Latina, desde donde hace una contribución importante al feminismo en el mundo, particularmente a las corrientes europeas, en donde hay una construcción mucho más intelectual y conceptual, en la que los distintos feminismos delimitan muy claramente sus apuestas y matices. Mientras en América Latina hay una especie de mezcla y de síntesis muy particular, entre el discernimiento intelectual y la vida concreta de la mujer popular.

¿Qué corrientes del feminismo clásico han influido más en América Latina?

Olga Lucía Ramírez: Hemos construido un feminismo ecléctico, que toma de una corriente y de otra. Ambas, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia han aportado en la construcción de nuestro pensamiento y nuestra práctica feminista. Mientras el feminismo de la diferencia nos ha ayudado a entender esos asuntos que situamos más en el campo de la subjetividad y que siguen siendo una apuesta de fondo del movimiento; el feminismo de la igualdad pone como eje de la lucha de las mujeres la búsqueda de la igualdad en la sociedad, y esto se traduce en luchas por desarrollos constitucionales, que hagan viables espacios en la vida política, la incursión de las mujeres en la planificación del desarrollo, entre otras expresiones.

En una lucha significativa del movimiento, las mujeres en Colombia hemos tenido importantes logros en el plano de la ley; hemos contribuido al logro del reconocimiento de la diversidad y de las "minorías", entre las cuales paradójicamente nos sitúan, aunque seamos mayoría entre la población. Esas ganancias se reflejan en diferentes artículos de la Constitución de 1991, donde los intereses de las mujeres fueron reglamentados y hay un cierto nivel de apropiación, aunque no de la sociedad en general. Sin embargo, esta conquista legal no se traduce en una resolución de los asuntos que de fondo estamos planteando. Queda la pregunta sobre si estos actos legales interpelan y resuelven aquello más constitutivo de nuestra lucha: la construcción de una sociedad en donde la relación entre mujeres y

hombres no esté regida por la lógica cultural del patriarcado.

La ruptura con los sectarismos nos ha permitido además que confluyamos diversas corrientes feministas: las tradicionales y las autónomas, con feministas institucionalizadas y mujeres de base organizadas, que precisan que no son feministas, y mujeres populares que empiezan a comprender su visión feminista de la experiencia y de su militancia.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes de este proceso de construcción del movimiento social de mujeres en las últimas décadas?

Olga Lucía Ramírez: Un momento importante en esta construcción de la acción política de las mujeres han sido las iniciativas que, desde mediados de los 90, viene haciendo la Organización de las Naciones Unidas, dinamizadoras de la discusión conceptual y la construcción del movimiento social de mujeres en el mundo. Con la Conferencia de Nairobi, en 1985, y la Conferencia de Beijing, en 1995, se hace visible el problema de las violencias contra las mujeres como una apuesta política del movimiento, es decir, la violencia doméstica o privada y la violencia pública, la discriminación como un asunto de sociedad, como un problema grave de salud pública. Este esfuerzo del movimiento efectivamente logró poner sobre la mesa y hacer público una problemática que muchas personas consideraban que no era un problema político, porque ocurría en la intimidad.

Otro momento importante es la visibilización del problema de la guerra y del impacto de ésta en las mujeres en Colombia. Este acontecimiento se da en la década de los 90. En 1995, en un ámbito muy específico, la re-



flexión sobre el hecho de las violaciones masivas a mujeres en Pueblo Nuevo, corregimiento de Turbo, Urabá, se abre una iniciativa donde se comienzan a relacionar estas violencias privadas con el problema de la guerra. Allí se denuncia la violación sexual de un altísimo porcentaje de mujeres de ese lugar por los distintos actores armados legales e ilegales, lo que se convierte en la mecha que enciende la conciencia de que hay que hacer algo en términos de solidaridad con las víctimas.

A partir de este despertar, distintas organizaciones, especialmente en Bogotá y en Medellín, en particular en la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, empezamos a plantear una movilización en solidaridad con las mujeres víctimas de la guerra, que impulsó la decisión de hacer uso de las articulaciones que ya existían en el movimiento en distintas regiones del país, y que se concretó como una Ruta Pacífica a Urabá. Ahí nace la

Ruta Pacífica de las Mujeres, como una respuesta concreta en términos de solidaridad a las mujeres víctimas de la guerra, teniendo presente que una manera particular en que las mujeres se vinculan es a partir del uso de sus cuerpos como arma moral para destruir a los enemigos, porque en este caso las mujeres son un pretexto para herir y agraviar al contrario.

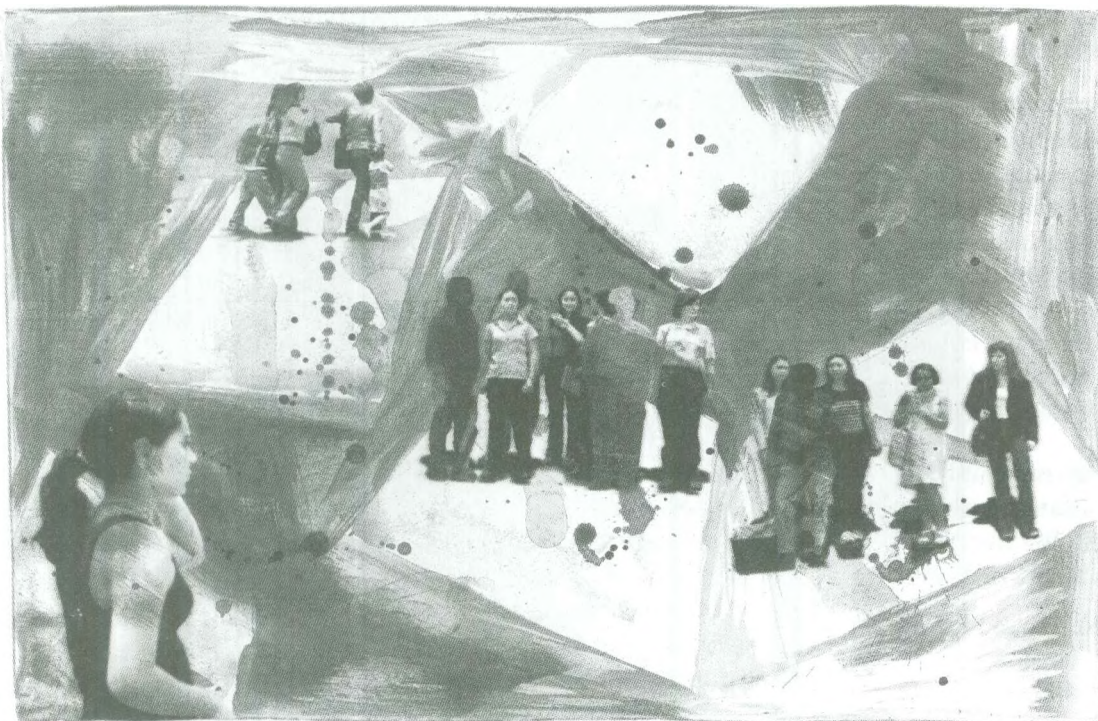
Esta acción relativamente espontánea, devino en el transcurso de los meses en la construcción de una iniciativa que pensara dos cosas fundamentalmente:

- Visibilizar el impacto de la guerra en las mujeres, y
- Poner en evidencia las potencialidades de un trabajo desde las mujeres, en función de salidas políticas negociadas al conflicto armado.

En esta iniciativa se ha renovado el proceso de convergencia de sectores sociales diversos, diferentes

expresiones sociales, incluyendo organizaciones no gubernamentales de mujeres, mujeres de sectores populares, estudiantes e intelectuales de organizaciones políticas. Así, contamos con un movimiento nacional que da cuenta de las realidades regionales, con expresiones organizativas de alcance regional en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Putumayo, Cauca, Chocó, Cartagena y Risaralda.

Luego del primer momento de génesis, gestación y surgimiento, que se concreta en la movilización el 25 de noviembre de 1996 a Mutatá, en el Urabá Antioqueño, nos preguntamos por qué no mantener un nivel de coordinación, dado que una movilización no resuelve el problema de la guerra; y fue así como nos abocamos a un período de configuración en tanto iniciativa nacional, humildemente intentando entenderla como expresión de inclusión de la diversidad regional en la vida nacional.



Se construye una estructura muy elemental, una coordinación general y reuniones periódicas muy espaciadas en el tiempo, máximo 2 por año, donde las regiones tengan un peso específico de importancia, y donde los recursos que se consiguieron los cuatro primeros años eran en función de la movilizaciones, estrategia fundamental en todo este período.

¿Cómo ha sido el proceso de consolidación?

Olga Lucía Ramírez: Posteriormente se elabora una formulación más acabada del proyecto, que fue analizada por importantes organizaciones internacionales y un sector de la sociedad civil de Suiza conformado por las principales agencias de cooperación de ese país, y por primera vez se asegura una financiación para el fortalecimiento organizativo. En este momento se dispone de un recurso que nos permite tener una coordinación nacional y reuniones

periódicas, en ocasiones con bastante frecuencia, lo que redundó en el fortalecimiento de la iniciativa y del proceso de equilibrio regional que ha jugado muy favorablemente en esta construcción.

En el marco de este proceso de fortalecimiento, la Ruta se ha reunido nacionalmente siempre en torno a la preparación de las movilizaciones, en términos de acciones hacia afuera y al servicio del fortalecimiento como iniciativa, y este año por primera vez, antes de terminar este semestre, se va a realizar un encuentro nacional con la representación de las 9 regiones, con el fin de legitimar, concertar y afinar las reglas de funcionamiento, la estructura y las apuestas de la iniciativa.

En estos ocho años, además de la movilización inicial a Mutatá, se han realizado movilizaciones a diferentes lugares del país que sufren los rigores de la guerra y que requieren que

se visibilice la forma como la contienda militar victimiza de múltiples maneras a las mujeres. Hemos visitado al suroeste antioqueño, Barrancabermeja, Medellín y Bogotá, entre otras regiones. La movilización más reciente se produjo el 25 de noviembre del 2003, cuando más de 3.500 mujeres nos desplazamos desde todo el país al departamento del Putumayo y allí nos manifestamos contra los efectos de las fumigaciones que se efectúan en el marco de la guerra contra las drogas y que afectan a cientos de personas, la mayoría de ellas mujeres que ven violados sus más elementales derechos.

Además, hubo otra movilización a Bogotá, asociada al surgimiento del Movimiento de Mujeres contra la Guerra, el 25 de julio de 2002, lo cual se inscribe en el marco de la política de alianzas que va construyendo la Ruta y que nos llevó a una concertación con la Organización Femenina

Popular, la Red Nacional de Mujeres, la Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Mesa Nacional de Concertación.

¿Cuáles son las apuestas de la Ruta Pacífica de la Mujeres?

Olga Lucía Ramírez: Lo que constituye nuestra identidad básica es que la Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento social que se declara pacifista y feminista; estos son sus dos pilares fundamentales. Feministas, porque la Ruta recoge y profundiza el legado del movimiento mundial y, en la medida en que el problema de la guerra pone de presente el uso y el abuso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, pone en el centro uno de los asuntos que el feminismo ha reivindicado de una manera más contundente, y es que las ideas se corporizan, que hay que dar cuerpo al pensamiento. Además, porque todo el discurso de la razón es un discurso que se construye en el plano de las ideas y deja por fuera toda la complejidad de la existencia humana. Para nosotras la potencialidad de la maternidad que pasa absolutamente por el cuerpo implica otra clave para el feminismo y es la cuestión de la posibilidad de acoger la diferencia y el reconocernos nuestra condición de seres humanos, con toda la complejidad que somos y toda la mutación posible que pasa en nuestras vidas.

Puede afirmarse también que en la Ruta hay una serie de *intuiciones*; esa afirmación feminista retoma mucho la centralidad del cuerpo en la construcción de pensamiento y que, dado que una característica de la guerra es la expropiación y agresión de los cuerpos, de ahí que el pensamiento feminista tenga mucho que decir sobre la guerra. Es allí donde se construye una conexión

con el pacifismo, ya que la guerra, y cualquier tipo de autoritarismo, son las mayores expresiones del patriarcalismo; y el feminismo y el pacifismo señalan el horror que implica el ejercicio de la violencia para eliminar las diferencias y para instaurar la intolerancia.

Para nosotras, en este momento y en este país, en el que estamos tan lejos de una negociación política del conflicto armado, es muy importante subrayar todo el tiempo que la nuestra es una lucha contra cualquier forma de la violencia y de eliminación del adversario como vía de resolución de cualquier tipo de conflictos, y no sólo del conflicto armado. En la afirmación de la búsqueda de la paz pensamos que a veces podemos quedarnos cortas en el reconocimiento de la condición conflictiva de los individuos y las sociedades y que de lo que se trata es de generar en todos los casos condiciones para un trámite pacífico de cualquier conflicto. Además, a veces la búsqueda de la paz pareciera reducida a un pacto entre actores armados más que a un repensar el conjunto de la sociedad. Entonces, en la afirmación de esa postura contra la guerra están implicadas posiciones que tienen que ver con la transformaciones de las relaciones intersubjetivas, lo cual es una condición de la cohabitación en cualquier circunstancia.

¿Qué piensan de la justicia y reconciliación?

Olga Lucía Ramírez: Negociación política sin impunidad, solución política con memoria, o solución política con reconocimiento de las víctimas, son asuntos que están en el corazón de la propuesta de la Ruta. En el año 1997 en Cartagena, hicimos un tribunal para juzgar simbó-

licamente los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. En el momento actual, para nosotras sigue siendo muy importante el problema de la memoria para que la reconciliación se pueda mirar como una posibilidad real, máxime teniendo en cuenta que estamos en la necesidad de volver a construir un futuro común, de vivir juntos, en medio de nuestras diferencias.

¿Cuáles son los retos propuestos?

Olga Lucía Ramírez: La Ruta Pacífica de las Mujeres está detrás de una construcción que sea realmente nacional, que sea capaz de incorporar la diversidad y, sin duda, hemos dado pasos y seguimos persistiendo en ese empeño, lo cual es un valor muy importante. Igualmente, creo que hemos visibilizado que la guerra no afecta a toda la población de la misma manera, que las mujeres participamos y somos víctimas de las acciones de la guerra de una manera cuantitativa y cualitativamente diferente.

La Ruta ha se ha puesto también un camino de alianzas y de tender puentes con otras organizaciones e iniciativas afines, reconociendo nuestras diferencias; abocadas a construir en esa diversidad, hemos elegido un camino que implica el ejercicio de solidaridades y construir apuestas comunes. Fruto de este esfuerzo, por ejemplo, la Ruta ha empezado a incorporarse a nivel internacional al proceso del Foro Social Mundial, al reconocerlo como un proceso sumamente importante en términos de construir una sociedad civil global, y cuyos resultados son visibles y maravillosos. ○

“Sólo un futuro
que acoge los agobios,
las dudas y los sueños
del presente
resulta atractivo.
No basta que
un futuro sea posible:
Hay que tener
la motivación
para querer realizarlo”.



Norbert Lechner
1939-2004
In memoriam



Calle 55 41-10 Tel: (57-4) 2166822 Fax: (57-4) 2395544 A.A. 67146
Medellín - Colombia coregion@region.net.co Pág. web: www.region.org.co